



Impactos del orden público en la ejecución de proyectos de infraestructura energética: un estudio de caso en la subregión del Norte Antioqueño

Gladys Elena Chavarría Gómez

Joan Sebastián Rendón Echavarría

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bello (Antioquia)

Programa Especialización en Gerencia de Proyectos

mayo de 2025

Impactos del orden público en la ejecución de proyectos de infraestructura energética: un estudio de caso en la subregión del Norte Antioqueño

Gladys Elena Chavarría Gómez

Joan Sebastián Rendón Echavarría

Monografía presentado como requisito para optar al título de Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor

Jaime Darío Restrepo Díaz

Magister en Gestión Tecnológica

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bello (Antioquia)

Programa Especialización en Gerencia de Proyectos

mayo de 2025

**Dedicatoria**

A Dios por ser nuestra guía constante.

A nuestras familias, por su apoyo y amor incondicional a lo largo de este proceso.

A nuestros amigos y compañeros, por su amistad y colaboración.

## **Agradecimientos**

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los docentes de la especialización; su entera dedicación, formación y paciencia fueron significativos en nuestro proceso de crecimiento profesional.

A los profesionales y comunidad que hicieron parte de este proceso, quienes con sus experiencias y valioso conocimiento contribuyeron en la consolidación de esta monografía.

## Contenido

Lista de tablas .....	8
Lista de anexos.....	9
Resumen .....	10
Abstract.....	11
Introducción.....	12
CAPÍTULO I .....	14
1 Planteamiento del problema .....	14
1.1 Contexto.....	14
1.1.1 Descripción.....	16
1.2 Formulación del problema.....	18
2 Objetivos .....	18
2.1 Objetivo General.....	18
2.2 Objetivos específicos .....	18
3 Justificación.....	18
CAPÍTULO II .....	21
4 Marco Referencial.....	21
4.1 Marco contextual.....	21
4.2 Marco Teórico.....	22
4.2.1 Noción de orden público.....	22
4.2.2 Bussiness dynamism in contexts of armed conflict in Colombia: a multidimensional approach (2024) 24	24
4.2.3 Understanding the link between energy poverty and economic growth in latin America (2023) 26	26
4.2.4 Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia .....	27
4.3 Marco Conceptual.....	30
4.3.1 Orden público .....	31
4.3.2 Proyectos de infraestructura .....	32
4.3.3 Sector energético.....	32
4.3.4 Desarrollo socioeconómico.....	32
4.4 Marco Legal.....	33

4.4.1	Constitucionalidad .....	33
4.4.2	Legislación.....	35
4.4.3	Jurisdiccional.....	37
CAPÍTULO III .....		38
5	Diseño metodológico .....	38
5.1	Alcance.....	38
5.2	Diseño .....	38
5.3	Enfoque.....	39
5.4	Población y muestra .....	39
5.4.1	Población.....	39
5.4.2	Muestra.....	39
5.6	Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información y datos .....	40
5.6.1	Fuentes de información .....	40
5.6.2	Técnicas de recolección de información.....	41
5.6.3	Instrumentos utilizados .....	41
6	Plan de acción del proyecto .....	41
7	Resultados y discusión .....	43
7.1	Objetivo 1. Identificar los principales factores de orden público que afectan el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en los municipios del Norte Antioqueño .....	43
7.1.1	Resultados.....	43
7.1.2	Análisis .....	47
7.2	Objetivo 2. Examinar los impactos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño .....	51
7.2.1	Resultados.....	51
7.2.2	Análisis .....	54
7.3	Objetivo 3. Analizar las principales dificultades que se han presentado con las comunidades locales durante la construcción de proyectos de infraestructura energética .....	58
7.3.1	Resultados.....	58
7.3.2	Análisis .....	63
7.4	Objetivo 4. Definir Estrategias que permitan minimizar los efectos del orden público en el desarrollo de proyectos energético en el Norte de Antioquia .....	68
7.4.1	Resultado .....	68

7.4.2	Análisis .....	70
8	Conclusiones .....	75
	Referencias.....	78
	Anexos.....	82

### Lista de tablas

Tabla 1. Diseño metodológico de la monografía .....	38
Tabla 2. Plan de acción de la monografía .....	42
Tabla 3. Matriz de factores, impactos y áreas afectadas en proyectos de infraestructura energética en el norte de Antioquia .....	43
Tabla 4. Hallazgos de efectos del orden público en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura energética .....	52
Tabla 5. Matriz de actores clave .....	57
Tabla 6. Resumen de hallazgos por pregunta .....	58
Tabla 7. Estrategias de minimización de efectos del orden público en proyectos de infraestructura energética .....	68

### Lista de anexos

Anexo 1. Entrevista semiestructurada .....	82
Anexo 2. Alerta temprana .....	83
Anexo 3. Registro fotográfico .....	85
Anexo 4. Gráfico resumen de entrevistas .....	86

## Resumen

Este proyecto aborda una problemática crucial en el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura energética, enfocándose en un estudio de caso de la subregión del norte de Antioquia, donde el orden público es un elemento determinante. Se estudiaron los factores que influyen en la estabilidad, ejecución, planificación, operación y seguridad de estos proyectos, para minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para la región.

El papel de los actores armados, conflictos sociales, económicos y otros factores de inestabilidad, son de trascendencia para la ejecución de estos proyectos. Mediante un análisis integral de estas variables, se identificaron estrategias para mitigar impactos en la ejecución, costo y sostenibilidad de estos, asegurando su continuidad a largo plazo.

Finalmente, para lograr un estudio preciso de los fenómenos relacionados, se optó por una investigación con metodología descriptiva y explicativa, enmarcada en un diseño no experimental, con enfoque cualitativo. Estos métodos permiten un análisis profundo y detallado de los eventos, basándose en la observación de los contextos sociales y políticos de los proyectos objeto de estudio.

*Palabras clave: Conflicto armado; conflictos sociales; Infraestructura Energética; orden público*

### **Abstract**

This project addresses a crucial issue in the development and implementation of energy infrastructure projects, focusing on a case study of the sub-region of northern Antioquia, where public order is a determining element. The factors that influence the stability, execution, planning, operation and security of these projects were studied in order to minimize the negative impacts and maximize the benefits for the region.

The role of armed actors, social and economic conflicts and other factors of instability are of transcendence for the execution of these projects. Through a comprehensive analysis of these variables, strategies were identified to mitigate impacts on the execution, cost and sustainability of these projects, ensuring their long-term continuity.

Finally, in order to achieve an accurate study of the related phenomena, a research with descriptive and explanatory methodology was chosen, framed in a non-experimental design, with a qualitative approach. These methods allow a deep and detailed analysis of the events, based on the observation of the social and political context of the projects under study.

*Keywords: Armed conflict; Social conflicts; Energy infrastructure; Law and order*

## Introducción

Actualmente, el sector energético desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y económico de las regiones, y en el Norte Antioqueño no es la excepción. La provisión de servicios energéticos eficientes y sostenibles es esencial para mejorar la calidad de vida de las comunidades, promover el desarrollo en diferentes dimensiones y mejorar condiciones de vida en zona rurales. El sector, se posiciona como un pilar importante para la economía de Colombia, en la medida en que, aporta un 7% de producto interno bruto (PIB) nacional y un componente clave de inversión extranjera, generando el 33% del total. Además, genera el 56% de las exportaciones, proporciona un alto porcentaje de empleo formal y contribuye ampliamente en el ingreso de regalías (Gobernación de Antioquia , 2025).

En este contexto, los proyectos de infraestructura energética son clave para garantizar el acceso a servicios básicos, el impulso de desarrollo económico y la generación de empleo. No obstante, el orden público en Colombia, especialmente, en zonas con alta incidencia de grupos armados ilegales, ha generado un impacto directo y negativo en la ejecución de estos proyectos, especialmente en la región del norte de Antioquia.

Este proyecto de ***impactos del orden público en proyectos de infraestructura energética: un estudio de caso del Norte Antioqueño*** tiene como objetivo analizar los efectos de aspectos como el papel del conflicto armado, conflictos sociales, económicos y otros factores de inestabilidad sobre los proyectos de infraestructura energética en esta subregión.

En ese sentido, en el prime capítulo, se presenta la propuesta de investigación, donde se definen los objetivos, general y específicos; además, la descripción y el planteamiento del problema de investigación. En el segundo capítulo, se presenta un marco referencial que aborda la contextualización de la subregión, conceptos, legislación e investigaciones previas y teorías relacionadas con el impacto del orden público en el sector energético y/o proyectos de infraestructura de esta índole. Finalmente,

en el tercer capítulo, se expone el diseño metodológico del proyecto, que incluye el plan de acción, los resultados esperados y las conclusiones derivadas de la investigación.

Para llevar a cabo este estudio, se realizó una exhaustiva revisión documental que incluyó diversas relacionadas con el sector energético y el orden público en el territorio antioqueño. Estas fuentes comprendieron revistas especializadas, sitios web, noticias, secciones de libros e investigaciones previas, consultadas en la biblioteca virtual de la UNIMINUTO y en las bases de datos de acceso libre de Google Scholar.

## CAPÍTULO I

### 1 Planteamiento del problema

Este capítulo analiza la influencia e impacto del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el norte de Antioquia. Se inicia con un análisis contextual, que afianza las bases para la formulación de la pregunta de investigación, la definición y delimitación de los objetivos y, el propósito del estudio.

#### 1.1 Contexto

En Colombia, el sector energético es un pilar fundamental para el desarrollo de las regiones, puesto que, cubre la demanda de servicios de energía a través de la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización. Esta cobertura abarca desde las necesidades de grandes industrias y actividades productivas, hasta el suministro doméstico (Ministerio de Minas y Energía , s.f.).

Como se expone, en el informe de transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia (Minenergía, 2021), la fase de construcción de algunos proyectos de esta índole, se han visto impactados por variables de difícil predicción, como el orden público.

Para mitigar rápidamente estas amenazas que vulneran las actividades y procesos del sector, el Ministerio de Minas y Energías, ha implementado la política sectorial de gestión del riesgo de desastres. Esta política busca prevenir y mitigar los potenciales riesgos; entre los que incluyen la indisponibilidad, redes de distribución y la interrupción del servicio por actos de terceros. Con esto, garantizan la continuidad de actividades de los diferentes proyectos de infraestructura energética (s.f.)

El norte de Antioquia se destaca como una región estratégica para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética en Colombia; debido a su riqueza en recursos naturales, que incluyen hidrocarburos, minerales, fuentes hídricas y su ubicación geográfica que facilita la conexión con otros departamentos del país.

Según la Gobernación de Antioquia (s.f. ), la economía del norte Antioqueño se sustenta en diversos sectores: el sector agropecuario, en el que se destaca la producción lechera y la cría de cerdos; el sector industrial, que se centra en fábricas de lácteos y carnes, fábricas de confección para maquila, entre otros; y, el sector energético, con un alto grado de importancia por la riqueza hídrica del territorio para la generación de energía. Además, cuenta con embalses como: Quebradona, Troneras, Mira Flores y Rio grande, tiene participación en embalses de Porce II y III y en el megaproyecto Hidroituango.

La subregión presenta una distribución demográfica diversa, con una población total de 258.339 personas con proyecciones al 2024, distribuidas en 17 municipios; La zona urbana concentra 137.208 personas, mientras que la zona rural tiene 121.131 habitantes<sup>1</sup>. La economía se sustenta principalmente por la ganadería, agricultura y generación de energía; lo que refleja la riqueza natural de la región y su potencial productivo (Gobernación de Antioquia , 2025).

El reporte destaca, que esta región de Antioquia está conformada por los siguientes municipios: Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entreríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, y Yarumal (2025).

De acuerdo con el informe: Subregión Norte de Antioquia, perfil de desarrollo subregional (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, Universidad de Antioquia & Gobernación de Antioquia), la subregión se ha caracterizado por presentar numerosos homicidios del departamento, específicamente relacionados a la fuerte presencia de grupos armados en el territorio (2020).

En efecto, la inestabilidad política iniciada en 1964 con el surgimiento del conflicto armado interno y diversos grupos armados, incluyendo guerrillas, paramilitares y grupos delincuenciales, sentó

---

<sup>1</sup> DANE (proyecciones del norte de Antioquia a 2024 con base en el censo de 2018 ajustes postCovid), citado en Gobernación de Antioquia, Plan de Desarrollo Departamental “Por Antioquia Firme” 2024-2027

bases para el incremento de la violencia y el auge del narcotráfico en las diferentes subregiones de Antioquia (Gobernación de Antioquia , 2022).

En la actualidad, el territorio del norte antioqueño sigue enfrentando desafíos significativos debido a la persistente presencia de grupos armados ilegales, tales como el ELN y las disidencias de las FARC, así como la presencia de grupos paramilitares que han generado violencia y desplazamientos en la región. Además, la coexistencia del narcotráfico y la delincuencia común, afectan de manera substancial el desarrollo y sostenibilidad de proyectos de infraestructura, especialmente en el sector de energía.

### **1.1.1 Descripción**

Como se ha expuesto en apartados anteriores, el presente proyecto se centra en el análisis detallado de los impactos del orden público sobre los proyectos de infraestructura energética en la subregión del norte antioqueño. La importancia de este radica en el papel crucial que juega el orden público para el éxito de dichos proyectos.

Efectivamente, en la Subregión los proyectos del sector energético se han visto afectados por problemas de orden público; pues, la violencia y la presencia de los diferentes grupos armados ilegales en la región han obstaculizado el desarrollo adecuado de estos proyectos, particularmente en la construcción de redes eléctricas, plantas de energía y otros sistemas claves. Esta situación genera retrasos en la ejecución de los proyectos, incrementa los costos y pone en riesgo la seguridad tanto de las comunidades aledañas, como de los contratistas y del personal adscrito.

Esta problemática ha sido particularmente grave en los últimos años, a medida que los conflictos internos y la presencia de los grupos ilegales se intensificaron en la región, específicamente en las zonas rurales. En corroboración de esto, en 2023, El Colombiano reportó que una torre de energía fue derribada por parte de actores ilegales en una vereda del municipio de Angostura, en el marco de confrontaciones que se presentaban en este territorio (Santiago Olivares Tobón, 2023).

Además, se ha registrado otros eventos de orden público en municipios como Yarumal, Valdivia y Briceño donde la presencia de estos actores ha sido más evidente. Este escenario, afecta principalmente a las empresas encargadas de los proyectos de infraestructura energética, a las autoridades locales y primariamente, a las comunidades que son objeto de los beneficios y servicios que estos proveen para mejorar sus condiciones y calidad de vida.

En suman, el desarrollo de estos proyectos genera grandes beneficios para la población, como el acceso a servicios básicos, el impulso de desarrollo económico y la generación de empleo. Por lo tanto, es necesario pensar en estrategias que reduzcan el impacto en la ejecución, costo y sostenibilidad de estos proyectos, permitiendo que las empresas tanto públicas como privadas, puedan cumplir en sus indicadores de calidad y garantizar el buen servicio a sus clientes.

#### **1.1.1.1 Posibles Causas**

- Efecto de la participación de la comunidad en la supervivencia de los proyectos
- Efecto del nivel de ingresos en la supervivencia de proyectos
- Actividad productiva
- Recursos Naturales
- Densidad poblacional
- Zona geográfica
- Aspectos técnicos

#### **1.1.1.2 Posible Consecuencias**

- Mejorar las condiciones del servicio
- Reconocimiento de las comunidades
- Propicia dinamismo y desarrollo en la economía de la región
- Sostenibilidad en el tiempo
- Seguridad del personal
- Ampliación en la cobertura y respaldo del servicio de energía

## **1.2 Formulación del problema**

¿Cómo impacta el orden público, el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño?

## **2 Objetivos**

### **2.1 Objetivo General**

Proponer estrategias para minimizar los efectos del orden público en el desarrollo de proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia.

### **2.2 Objetivos específicos**

- Identificar los principales factores de orden público que afectan el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en los municipios del Norte Antioqueño
- Examinar los impactos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño
- Analizar las principales dificultades que se han presentado con las comunidades locales durante la construcción de proyectos de infraestructura energética
- Definir estrategias que permitan minimizar los efectos de orden público generados por el desarrollo de proyectos energético en el norte de Antioquia

## **3 Justificación**

A nivel nacional, el sector energético representa un campo esencial para el desarrollo, el progreso y crecimiento sostenible de las regiones. Además, por su grado de importancia en la generación de empleo y en la provisión de recursos para el presupuesto nacional, destinados a la inversión social del Estado, y sus entes territoriales, a través de regalías, impuestos y dividendos (Nieves Zárate & Hernández Vidal, 2016). Sin embargo, la inestabilidad del orden público en diversas regiones

del país, ha planteado retos significativos para la ejecución de proyectos de infraestructura, incluyendo los de este sector productivo. El crecimiento de la producción y distribución en extensas áreas rurales también ha generado un incremento de los ataques cometidos por grupos armados ilegales.

La presencia y las actividades de estos actores armados ilegales constituyen uno de los mayores factores de riesgo del orden público que dificultan el desarrollo adecuado de los proyectos de infraestructura energética. En efecto, el entramado del conflicto armado ha generado escenarios de incertidumbre para las empresas, entidades responsables de los procesos energéticos en diversas regiones del país y a la comunidad en general; lo que se traduce en, desafíos estructurales y de gestión para la planificación, ejecución y sostenibilidad de estos proyectos, afectando tanto la inversión como la prestación de los distintos servicios derivados de esta actividad.

En el contexto de Antioquia (Duque Grisales & Arango Vásquez, 2016), destacan el potencial hidroeléctrico del Departamento, basado en sus abundantes caudales, la calidad del agua, la regulación de los mismos, las favorables caídas topográficas y la estabilidad geológica del subsuelo. El territorio cuenta con una infraestructura de conectividad vial y eléctrica adecuada, lo que facilita el acceso a las áreas de los proyectos y permite el transporte eficiente de la energía producida<sup>2</sup>.

En resumen, su potencial hidroeléctrico, se debe a sus abundantes cuencas hídricas y un terreno propicio para la generación de energía. Adicionalmente, su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para la conexión de importantes corredores viales hacia la región Caribe y otras zonas del país, consolidándola como un pilar fundamental para el desarrollo energético nacional.

Sin embargo, el orden público ha sido una barrera considerable en la implementación de estos proyectos. La presencia de grupos armados ilegales y conflictos sociales en la zona han generado

---

<sup>2</sup> Duque Grisales, E. & Arango Vasques León, E.A (2016). Alternativa de las pequeñas hidroeléctricas de Antioquia en el mecanismo de desarrollo limpio. Revista Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Pág. 5-6. Recuperado de <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=1513&numero=52655>

desafíos en términos de seguridad, acceso y estabilidad. Por lo tanto, es imperativo entender cómo estas condiciones afectan tanto la viabilidad como la factibilidad de las inversiones en infraestructura energética.

Esta monografía adquiere gran relevancia para la zona de estudio, dado que la preocupación por el orden público y sus repercusiones en la vida de las comunidades ha sido una constante histórica en Colombia. Sin embargo, existen numerosas investigaciones sobre el conflicto armado y sus efectos en las sociedades y son escasos los estudios que abordan el impacto específico del orden público e inestabilidad social en los proyectos de infraestructura energética en esta subregión de Antioquia.

Cabe resaltar que, el acceso a energía confiable es fundamental para el desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida y el crecimiento sostenible. En el caso del norte antioqueño, los proyectos de infraestructura energética no solo buscan atender la demanda energética, sino también promover la competitividad de la región, atraer inversión extranjera y crear empleos. Asimismo, la expansión de la infraestructura energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales, donde el acceso a la electricidad es limitado.

En suma, el proyecto tipo monografía busca identificar los impactos del orden público en la zona norte de Antioquia, permitiendo a empresas públicas y privadas implementar medidas efectivas que aminoricen los potenciales factores que represente un riesgo para la planificación, ejecución y sostenibilidad de los proyectos. Los resultados permitirán a las entidades o empresas diseñar e implementar estrategias efectivas de gestión de impactos, enfocadas en la prevención, mitigación, corrección y compensación; por medio de un trabajo colaborativo con las comunidades, buscando restaurar la credibilidad de las empresas ejecutoras y el desarrollo integral de la región.

## CAPÍTULO II

### 4 Marco Referencial

Este marco referencial se centra en indagar sobre los impactos del orden público en el desarrollo de proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia, un territorio que ha experimentado históricamente afectaciones por el conflicto armado y presencia de actores ilegales que han generado escenarios de incertidumbre en los sectores y las comunidades. Se realizó una breve revisión de los marcos contextual, teórico, conceptual y legal para generar un enfoque integral de la situación objeto de estudio.

#### 4.1 Marco contextual

El trabajo se realizó mediante un estudio de caso en la subregión del Norte Antioqueño, una zona estratégica para el desarrollo de proyectos energéticos y que en los últimos años ha sido afectada por factores de orden público.

Según (Gómez, Corredor Rodríguez, Arias Suarez & Mayorga, 2020), en la investigación “Antioquia Silenciada”, la subregión se ha destacado por una importante riqueza hídrica, que ha propiciado el desarrollo de proyectos de energía de gran envergadura, como: “La central hidroeléctrica San Andrés ubicada en San Andrés de Cuerquia, con influencia en el municipio de Don Matías, el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango y la central hidroeléctrica Espíritu Santo, ubicadas en límites entre Ituango y Briceño y otras pequeñas centrales ubicadas en esta región, en municipios como San Andrés de Cuerquia, Angostura; entre otros.<sup>3</sup>

En efecto, en materia de seguridad, el territorio se ha visto afectado por la presencia de organizaciones criminales, entre las que se encuentran grupos armados organizados y grupos de delincuencia común. El mayor control territorial ha sido ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de

---

<sup>3</sup> La información contenida en este párrafo es extraída de la investigación: Antioquia Silenciada, elaborado por Juan Gómez, Silvia Corredor Rodríguez, Valeria Arias Suárez, Carlos Mayorga, periodistas de La Paz en el Terreno. Visualizar en: <https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/antioquia-silenciada/>

Colombia. Adicionalmente, se ha identificado presencia de otros grupos armados como las disidencias de las FARC (Frente 18 y 36), Los Caparros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales operan en la zona oriental de la subregión. Por último, en los municipios de Ituango, Entreríos y San Pedro de los Milagros, se han registrado actividades del grupo delincencial conocido como los Pachelly<sup>4</sup>.

En los últimos años, la actividad delictiva e influencia de estos grupos se ha venido fortaleciendo a lo largo de la región, generando alto impacto y grandes consecuencias en diversos aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales (Sorzano, Villamizar, Galván-Vela, & Ravina-Ripoll, 2024) que afectan a toda la población local.

## **4.2 Marco Teórico**

Para el desarrollo de este capítulo, se realizó una investigación basada en textos académicos e informes relacionados con la temática, mediante una revisión sistemática de la literatura disponible en las bases de datos accesible a través de la biblioteca virtual de UNIMINUTO, tales como SCOPUS, EBSCOhost, Dialnet Plus y PROQUEST; así como informes provenientes de fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo. La búsqueda de información se efectuó utilizando como herramienta principal la siguiente ecuación de búsqueda ("orden público" OR "conflictos sociales" OR "conflicto armado") and ("infraestructura pública" OR "infraestructura energética"), lo que permitió identificar documentos relevantes para el análisis. Esta revisión estuvo fundamentada en teorías previamente establecidas, que sirvieron como marco de referencia para la interpretación de hallazgos.

### **4.2.1 Noción de orden público**

La relación causal entre orden público y el desarrollo de proyectos de infraestructura es esencial para reconocer y comprender los múltiples desafíos que enfrentan las regiones del país, principalmente las zonas que han sido afectas por conflicto, inseguridad, violencia y otros factores de inestabilidad. En el contexto colombiano y de manera especial en Antioquia, el orden público no implica únicamente la

---

<sup>4</sup> Ibidem

presencia del Estado para garantizar las condiciones de seguridad, sino una comprensión integral de las dinámicas sociales, políticas y económicas que pueden influir en la ejecución y viabilidad de estos proyectos (Lorena & Faiver, 2022).

La noción de orden público ha sido tradicionalmente asociada a la estabilidad, la seguridad y el control del Estado sobre el territorio; sin embargo, en contextos marcados por tensiones sociales, disputas territoriales y presencia de grupos armados como ocurre en muchas regiones donde se desarrollan proyectos de infraestructura energética en Colombia, este concepto adquiere mayor relevancia y un carácter de complejidad. En este sentido, **Francois Godicheau** en su artículo de **Public order as an anti-political dimension** (2022), ofrece una base conceptual para debatir el concepto y asociarlo con las dinámicas del desarrollo energético en escenarios de conflictividad social; profundizando en el devenir histórico y político del orden público con su carácter cambiante y constante evolución, el autor puede abordar las *“the relations between institutions, polemisation/politicisation and social order in the historical scenario”*. En consecuencia, el significado de esa expresión logró interpretarse desde diferentes perspectivas o enfoques según el contexto particular, como lo evidencia en su artículo.

El autor demuestra cómo este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia, tomando forma de acuerdo con los contextos específicos en los que se desarrollan las sociedades. Un claro ejemplo de esta adaptación contextual se observa en la definición que la Corte Constitucional de Colombia ha dado al concepto, definiéndolo como un conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y estabilidad social, esenciales para el ejercicio de los derechos, el progreso colectivo y la protección de los derechos constitucionales (S. C-204-19).

Lo anterior sugiere que el orden público debe ser analizado y gestionado de manera integral, sin reducirlo al simple control de la violencia, criminalidad o inseguridad, sino que incluya un enfoque

integral que contemple todos estos elementos y las nuevas nociones sobre los derechos de las comunidades y sectores sociales.

#### **4.2.2 *Bussiness dynamism in contexts of armed conflict in Colombia: a multidimensional approach (2024)***

En contextos marcados por el conflicto armado el desarrollo económico y social enfrentan múltiples desafíos que requieren soluciones integrales y adaptadas a las diferentes realidades territoriales. Diversos estudios han abordado el papel de las empresas en escenarios de conflicto y postconflicto, destacando su potencial en su aporte a la estabilidad, el beneficio social y el progreso de las regiones históricamente afectadas por el flagelo de la violencia. En este sentido, se han generado enfoques teóricos, como el que plantean **Cardona Quintero y Lasso Silva**, en su artículo **Bussiness dynamism in contexts of armed conflict in Colombia: a multidimensional approach (2024)**, en el que proponen un enfoque multidimensional para comprender el papel del dinamismo empresarial en regiones afectadas por el conflicto armado en el territorio colombiano. Desde su estudio, se expone como la actividad empresarial impulsada por políticas públicas como los incentivos fiscales en zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), tienen un alto impacto no solo en la reactivación económica del sector, sino también en el desarrollo social, la generación de empleo y la reducción de desigualdades, especialmente, en las regiones más alejadas.

A partir de este análisis, los autores plantean que en contextos de postconflicto el fortalecimiento del tejido empresarial no debe verse como una estrategia económica, sino como un pilar central de la construcción de paz sostenible y de desarrollo territorial integral; resaltando la importancia del desarrollo empresarial, especialmente en las zonas rurales de las diferentes regiones para el progreso socioeconómico, la generación de impacto social y la consolidación de esfuerzos en materia de construcción de paz.

No obstante, a pesar de los avances en este tema, en Colombia aún existen tensiones entre las políticas públicas formuladas desde el nivel central y el dinamismo empresarial impulsado por los gobiernos locales o los sectores privados (Cardona & Silva, 2024). Esta situación, sumada a la descomposición del orden público puede derivar en una aplicación desigual de políticas de desarrollo y a dificultades para garantizar el crecimiento empresarial y el bienestar de las regiones más vulnerables, especialmente, en aquellas afectadas por el conflicto armado interno. Frente a este escenario, los autores proponen repensar el papel de las empresas en estos territorios, más allá de su función económica, sino como promotora del desarrollo integral y sostenible; por lo que resulta fundamental diseñar políticas públicas que respondan a las realidades, necesidades y características propias de los sectores productivos (empresariales), con el fin de fomentar el crecimiento, fortalecer el tejido social y contribuir efectivamente al desarrollo local (2024).

Esta teoría se fortalece con el artículo **sustentabilidad, desarrollo endógeno y economía social** elaborado por **Mozas Moral, Fernández Uclés, Bernal Jurado y Medina Viruel** (2020), quienes defienden un modelo de desarrollo centrado en las capacidades propias de los territorios que aprovechan todos sus recursos locales, priorizan la sostenibilidad y se fundamentan en las diferentes relaciones económicas basadas en la cooperación y el bienestar colectivo. Coincide con (Cardona & Silva, 2024), en cuanto a la necesidad de reflexionar sobre el rol de las empresas en los contextos más afectados o vulnerables a causa del conflicto, para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades y el desarrollo equitativo.

Como se mencionó previamente, el desarrollo endógeno se basa en aprovechar los recursos internos de las regiones para impulsar su propio desarrollo; lo que incluye el uso eficiente de sus propias capacidades en capital humano, recursos naturales, prácticas productivas, entre otros aspectos, para fomentar el desarrollo sostenible e independiente de factores externos (Mozas, Fernández, Bernal, & Medina, 2020). En este sentido, y en relación con la monografía, las infraestructuras energéticas

desempeñan un papel importante en el desarrollo integral de las regiones de su área de influencia. Los territorios que tiene acceso a fuentes de energía, recursos naturales y riqueza hídrica pueden mejorar capacidades de producción, generar empleos locales y aumentar la competitividad de los sectores productivos.

En este contexto, el desarrollo endógeno refuerza la percepción de que la reducción de las desigualdades sociales radica en modelos de desarrollo territoriales, inclusivos y sostenibles, basados en las realidades locales (2020).

#### **4.2.3 Understanding the link between energy poverty and economic growth in latin America (2023)**

En el contexto latinoamericano, la relación entre acceso a la energía y el desarrollo económico ha venido cobrando cada vez más relevancia. El artículo realizado por **Castro Cárdenas e Ibarra Yúnez** sobre **Understanding the link between energy poverty and economic growth in Latin America (2023)**, estudia cómo la pobreza energética afecta el crecimiento económico en diversos países de América latina. Por medio de un análisis basado en datos, los autores evidencian que existe una conexión directa entre la mejora en el suministro energético y el dinamismo económico, destacando la necesidad de políticas diferenciadas por país para abordar eficazmente este fenómeno. Dicha investigación provee una base de entendimiento sobre cómo el acceso desigual a la energía puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo sostenible de las regiones.

Uno de los aportes clave de este artículo es la propuesta de diseñar políticas públicas que, aunque estén alineadas con objetivos regionales se adapten a las realidades o contextos locales; lo que implica que no existe una única solución para todos los territorios, sino que se deben considerar diferentes factores estructurales como infraestructura, la disponibilidad de recursos energéticos y las características socioeconómicas de cada nación para el desarrollo y crecimiento económico de estas.

Esta relación cobra mayor relevancia cuando se analiza el impacto de factores externos como el orden público en la ejecución de proyectos de infraestructura energética; como el caso de estudio del

Norte antioqueño, donde los conflictos armados, sociales y la inseguridad ha sido una constante en la historia de los territorios (Gobernación de Antioquia , 2022). Por lo tanto, se vuelve importante comprender cómo estas dinámicas no solo dificultan el desarrollo adecuado de estos proyectos, sino que ralentizan el crecimiento económico en la región; puesto que, la seguridad energética está estrechamente vinculada con el concepto de orden público, en la medida en que, garantizar el suministro energético para responder a las necesidades sociales, asegurar un mínimo de dignidad humana a todos los actores y satisfacer sus propias necesidades básicas diarias (Aubin & Marcelau, 2024) fomenta condiciones de aceptación y evita conflictos sociales.

En este sentido, el análisis de (Castro & Yúnez, 2023) sobre la imperiosa necesidad de formular políticas públicas adaptadas a las propias dinámicas contextuales, se puede complementar con las anteriores teorías, en la medida en que abordan la importancia de promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible que contemple las características socioeconómicas y culturales de las diferentes regiones (Mozas, Fernández, Bernal, & Medina, 2020). Esta percepción es relevante para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética en la subregión objeto de estudio, pues subraya la necesidad de una integración de los recursos locales y de políticas públicas que favorezcan las dinámicas sociales y la mejora de las condiciones de vida de la población. Posteriormente, el enfoque dimensional destaca cómo el orden público, la seguridad y estabilidad política son elementos importantes para la viabilidad de proyectos de infraestructura, incluidos los energéticos y refuerzan la idea de que el desarrollo económico debe tener en cuenta las particularidades del territorio.(Cardona & Silva, 2024).

#### **4.2.4 Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia**

De acuerdo con la teoría anterior, los sectores minero- energético, aunque son sustanciales para el desarrollo socioeconómico de los territorios, a menudo han sido un factor de demandantes conflictos sociales, debido a la contraposición de intereses entre actores presentes en las zonas de influencia de estas actividades productivas.

Estas tensiones, se intensifican por diferentes dinámicas territoriales complejas, la presencia de grupos armados e intereses de sectores sociales, gubernamentales y empresariales. Este estudio titulado **“Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia”** realizado por la **(Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la conflictividad en Colombia, 2024)**, busca analizar cómo las conflictividades y distintas tensiones del territorio donde hay presencia de estos sectores, se relacionan con teorías del conflicto social y desarrollo, para comprender los impactos sociales y políticos emergentes. En general, estas conflictividades se analizan desde la perspectiva del conflicto social y del desarrollo, permitiendo identificar cómo las disputas por recursos estratégicos generan impactos sociales, políticos y económicos que trascienden lo local.

El fundamento de este análisis reside en la teoría de “materialismo dialectico” de Karl Marx, que concibe la dinámica social a través de conflicto, donde el cambio, las tensiones y las contradicciones actúan como mecanismos centrales que impulsan las fluctuaciones sociales; es decir, que el dinamismo de los sistemas sociales tiende a generar momentos en la historia de enfrentamientos (conflicto social) a causas de las propias dinámicas de estas<sup>5</sup>.

En este contexto, el informe de la Defensoría del Pueblo, previamente citado, resalta varios puntos importantes para comprender la conflictividad social asociada a los proyectos del sector minero, energético. De estos puntos, la investigación se centra en el segundo subsector: energético; para comprender a profundidad las dinámicas territoriales, tensiones particulares y contextuales que surgen en este ámbito y así darle argumento a la problemática planteada en la investigación.

Inicialmente, se brinda una contextualización del subsector de energía, que abarca varios procesos, entre ellos, la utilización de fuentes de agua mediante proyectos hidroeléctricos que

---

<sup>5</sup> Karl Marx “teoría del materialismo dialectico” citado en “The epistemic spiral of *Internal Relations*. Social Conflict as a change of *Aspect*” de Rafael Balza García (S.F.) Universidad Pedagógica Experimental Libertador-IPRGR Núcleo Interdisciplinario de Estudios Regionales y de Frontera CÍRCULO WITTGENSTEINEANO Universidad del Zulia San Cristóbal/Maracaibo -Venezuela

comprende las grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas en zonas con una amplia riqueza hídrica. Cabe resaltar que, las actividades de este sector de la economía generan un significativo aporte al Producto Interno Bruto y representan un factor importante de inversión extranjera<sup>6</sup>. Como resultado de estos procesos, se ha dinamizado la economía, generando empleo, inversión social e ingreso de regalías para las autoridades locales.

En esta línea, los proyectos de mayor envergadura se ubican en el norte de Antioquia, en el que se destaca el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. La Defensoría enfatiza que, a pesar de su influencia e importancia para la seguridad energética del país y los beneficios para el desarrollo económico y social de la región, ha generado grandes tensiones y conflictos ambientales y sociales; estos últimos con relevancia para la monografía. La implementación del proyecto ha generado alteraciones de orden público, como protestas y manifestaciones organizadas por comunidades afectadas, como el caso del Movimiento Ríos Vivos<sup>7</sup>. Estas movilizaciones responden a problemáticas sociales, ambientales y económicas que trascienden las zonas de influencia directa del proyecto.

A las problemáticas expuestas, se suma un factor determinante en la alteración del orden público: la presencia de grupos armados ilegales. En los contextos en los que el conflicto armado aún persiste, la implementación de estos proyectos incrementa la incertidumbre, los escenarios de riesgo y los impactos directos e indirectos en los derechos humanos de las comunidades, con situaciones de desplazamientos, desalojos, represiones de líderes y sociedad civil.

Por tanto, es importante reconocer que los conflictos no son ajenos al análisis de la seguridad energética, como exponen **Karpavicius, T; Balezentis, T; & Streimikiene, D**, en su teoría **Energy Security**

---

<sup>6</sup> El sector minero-energético ha sido un pilar en el desarrollo económico del país (Ministerio de Energía, 2019, citado en Defensoría delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, 2024, Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia).

<sup>7</sup> El Movimiento Ríos Vivos, una coalición de organizaciones sociales de las subregiones del occidente, norte y bajo Cauca en Antioquia, ha sido particularmente activo en las denuncias de los impactos del megaproyecto Hidroituango. Para obtener información detallada sobre sus actividades y demandas, se puede consultar su sitio web: <https://riosvivoscolombia.org/quienes-somos/movimiento-rios-vivos/>

**indicators for sustainable energy development: Application to electricity sector in the context of state economic decisions (2024)**, quienes abordan la seguridad energética como un componente fundamental del desarrollo sostenible, evaluado mediante indicadores que incluyen no solo la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico, sino la gobernanza, sostenibilidad ambiental y la vinculación con política públicas que se relacionen directamente con el contexto social y político de los territorios.

En síntesis, el documento proporciona una visión amplia en cuanto a, que las actividades del sector minero energético tienen un gran impacto en los territorios y comunidades donde se desarrollan. Si bien, estas actividades conllevan transformaciones territoriales y comunitarias importantes que generan beneficios sociales y económicos; también dan lugar a afectaciones sociales, económicas y ambientales, que al no ser gestionadas de manera adecuada se convierten en una fuente de conflicto social. Además, como se expuso con anterioridad, en muchos de estos escenarios de conflicto se han gestado situaciones de protesta social, manifestaciones y bloqueos de vías, que buscan visibilizar la falta de acciones por parte de las entidades, empresas públicas y/o privadas para minimizar los efectos generados por proyectos de este sector de la economía. Esta situación se agrava con la presencia de esos actores armados en los territorios que perturban la resolución de conflictos, aumentan las tensiones en el territorio y generan mayores riesgos para todos los actores involucrados y los procesos establecidos.

En general este marco teórico, ha proporcionado bases necesarias para analizar de manera individual y en conjunto cada una de las variables y abordar los posibles riesgos e impactos que puedan existir en el desarrollo e implementación de estos proyectos en el norte Antioqueño.

### **4.3 Marco Conceptual**

En esta sección, se van a abordar los conceptos clave que fundamentan esta investigación, proporcionando una definición de cada uno de ellos en relación con la problemática planteada. Los

conceptos, a considerar son: Orden público, proyectos de infraestructura, sector energético y desarrollo económico.

#### **4.3.1 Orden público**

Según la Corte Constitucional de Colombia, este concepto se refiere a un conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad (estabilidad social) y respeto, que permiten el ejercicio de los derechos y el progreso común, necesarios para el desarrollo de la vida social y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana como fin último (S. C-204-19).

En este contexto, la investigación se centra en cómo la seguridad y estabilidad social en el norte de Antioquia son componentes necesarios para garantizar los derechos humanos, el desarrollo social, económico de la comunidad y la seguridad del territorio. El objetivo es analizar de manera integral las repercusiones de esta noción para la ejecución exitosa de los proyectos del sector energético.

Además, al ser un concepto amplio es necesario revisar y establecer otras nociones que se desprenden del orden público, como:

##### **4.3.1.1 Seguridad**

El artículo 6 de la Ley 1801 de 2016, aborda la seguridad como la acción de “garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional”, elemento primordial para el orden público.

##### **4.3.1.2 Conflicto armado**

Esta investigación se adhiere a la definición de que “los conflictos armados son confrontaciones abiertas y armadas entre dos o más partes centralmente organizadas, con continuidad de enfrentamientos, y en disputas sobre el poder gubernamental y territorio” (Smith, 2002 ). Teniendo en cuenta que, desde la perspectiva de proyectos de infraestructura energética, el conflicto en esta región representa un potencial riesgo para la ejecución y sostenibilidad de estos.

#### **4.3.1.3 Manifestaciones sociales**

Según Julián Alberto Gutiérrez (2022), las manifestaciones sociales son “acciones colectivas que buscan presionar al Estado para obtener soluciones o expresar demandas ya sea ante entidades públicas o privadas.

#### **4.3.2 Proyectos de infraestructura**

Hace referencia a aquellas obras destinadas al mejoramiento y funcionalidad de un territorio. Su objetivo es impulsar el crecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de servicios, instalaciones y sistemas que aportan beneficios de diversa índole a la sociedad<sup>8</sup>.

#### **4.3.3 Sector energético**

Según el Ministerio de Minas y Energía, las normativas que rigen el sector energético en el país definen el régimen de prestación de los servicios públicos desde actividades como generación, interconexión, transmisión, distribución, comercialización de la energía y otras competencias de estructura y funcionamiento. Concretamente, el sector energético “es un conjunto de actividades económicas relacionadas con el uso de recursos renovables y no renovables para la producción, el suministro y el consumo de energía en sus diversas formas, como la electricidad, el calor, o los combustibles para su posterior procesamiento, así como la optimización del uso de energía mediante la eficiencia y la conservación energéticas” (Yépez-García, Levy, & Valencia J., 2016).

#### **4.3.4 Desarrollo socioeconómico**

Para la Organización de Naciones Unidas, el desarrollo abarca una amplia gama de temas, que requiere atención y prioridad. En este caso, el desarrollo socioeconómico son componentes del desarrollo sostenible que tiene una relación de interdependencia, como se refleja en los objetivos de

---

<sup>8</sup> Definición del concepto obtenida del artículo web: ¿Por qué son importante los proyectos de infraestructura para el desarrollo de un país?, vqingenieria.com (s.f.). <https://www.vqingenieria.com/por-que-son-importantes-los-proyectos-de-infraestructura-para-el-desarrollo-de-un-pais#:~:text=La%20infraestructura%20se%20conoce%20como,hospitalaria%2C%20educaci%C3%B3n%2C%20entre%20otros.>

desarrollo sostenible; en el que, estos conceptos implican un enfoque integral que busca la mejora de la calidad de vida y la promoción del bienestar social (ONU, 2025 ).

Después de revisar los conceptos anteriores, se concluye que estos están intrínsecamente relacionados; en la medida en que, el orden público influye de manera directa e indirecta en los proyectos de infraestructura energética. Un entorno con debilidades estructurales, como la alta presencia de grupos armados, la inseguridad y las constantes manifestaciones pueden generar retrasos, altos costos operativos y pérdidas, afectando negativamente los proyectos.

Por lo tanto, la viabilidad, factibilidad y sostenibilidad de estos proyectos requiere de un análisis integral, más allá de factores técnicos, logísticos o financieros, que abarque los aspectos del entorno social y político de las zonas de influencia. Esto, para asegurar un adecuado desarrollo de los proyectos, el progreso socioeconómico de las comunidades locales y garantizar el suministro de servicios a los diferentes sectores y regiones del país.

#### **4.4 Marco Legal<sup>9</sup>**

Esta sección establece el marco normativo y jurídico que fundamenta la monografía, abarcando las dimensiones constitucional, legislativa y jurisdiccional relevantes para el problema planteado.

##### **4.4.1 Constitucionalidad**

La constitución Política de Colombia de 1991, como marco jurídico fundamental para el Estado, contiene una serie de principios y normas para asegurar unas garantías sociales, políticas y económicas para la sociedad colombiana. Además, la constitución estructura y organiza la vida política y social desde un ámbito democrático y participativo, lo que resulta de importancia para este proyecto, puesto que, se busca revisar los fundamentos constitucionales que respalden el estudio de caso.

En materia de Orden Público:

---

<sup>9</sup> El conjunto de disposiciones constitucionales, legales y normativas contenidas en este apartado se adquirieron del portal web “función pública” en el link: <https://www.funcionpublica.gov.co/inicio>

**4.4.1.1 Artículo 189**, resalta que al presidente como jefe de Estado le corresponde conservar el orden público en todo el territorio nacional y restablecer donde sea alterado; misma función que se le atribuye a los gobernadores en cada uno de los departamentos a través del **artículo 303** y finalmente a los alcaldes en el nivel municipal, **artículo 315**.

**4.4.1.2 Artículo 213**, instituye que el presidente tiene la potestad de declarar estado de conmoción interior, en los casos en los que se perturbe el orden público en el país y no puedan ser solucionados por vías constitucionales.

Con relación a la infraestructura energética, aunque la Constitución Política no la expone de manera explícita, se pueden resaltar los siguientes artículos:

**4.4.1.3 Artículo 334**, el cual dispone que el Estado tiene la propiedad sobre los recursos naturales, su producción y distribución y la entrega progresiva del conjunto de bienes y servicios para el desarrollo de las regiones, que se derivan de estos.

**4.4.1.4 Artículo 366**, expresa el deber del estado en la contribución a la calidad de vida la población, a través de la solución de necesidades básicas insatisfechas y en el **artículo 367**, resalta las competencias en materia de prestación de los servicios públicos en cobertura, calidad y financiación.

Estas disposiciones en conjunto manifiestan un marco constitucional para el direccionamiento de acciones que garanticen una estabilidad interna o para el manejo del Estado, en situaciones que perturben el orden público en el territorio colombiano. Además de, plantear labores de desarrollo social, económico y de uso de los recursos naturales que, si bien no especifican su relación con proyectos de infraestructura energética, resaltan aspectos concernientes con el sector energético en el país.

#### 4.4.2 Legislación

En este apartado, se presentará un conjunto de disposiciones legales relacionadas con la monografía, con el fin de generar un marco estructurado que aborde las variables más destacadas de la investigación.

Con relación a las variables del orden público:

**4.4.2.1 Ley 418 de 1997**, es una de las leyes más importantes en cuanto a orden público, puesto que regula las medidas de prevención, control de delitos y situaciones que alteran la seguridad en el territorio. Además, promueve la reconciliación, convivencia pacífica, la participación de la sociedad en temas que les afecte y la garantía de derechos y libertades fundamentales.

**4.4.2.2 Ley 1448 de 2011**, esta normativa que busca la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, adquiere relevancia por su naturaleza al analizar el factor principal de la investigación, “orden público”, y las dinámicas sociales y territoriales que este conlleva. Permite analizar las consecuencias del conflicto armado, los efectos derivados del desplazamiento, despojo de tierras y los cambios estructurales que ha generado, en las relaciones sociales y territoriales. Específicamente, para proyectos de infraestructura permite identificar zonas afectadas para promover la participación de las comunidades, la generación de empleo, la no revictimización, para prever posibles escenarios de riesgos en seguridad y minimizarlos.

**4.4.2.3 Plan de Desarrollo Nacional “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022-2026**, en su conjunto de políticas, ejes estratégicos y programas busca el desarrollo de las diferentes regiones del país en varias dimensiones. Las directamente relacionadas con la monografía son:

- En la línea de seguridad humana y justicia social, contempla acciones orientadas a las garantías de derechos de las víctimas del conflicto armado, a la convivencia y seguridad ciudadana, a la transformación de la fuerza pública para el fortalecimiento de sus

capacidades y al fortalecimiento de los programas de justicia transicional (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2025)

- En cuanto a los sectores económicos, enfatiza en la importancia de la transición energética, modernización de la infraestructura energética, aprovechamiento y desarrollo de energías renovables y la integración regional para fortalecer y garantizar el abastecimiento a lo largo de los territorios (2025)

**4.4.2.4 Plan Nacional de electrificación Rural – PNER**, el (Ministerio de Minas y Energía , s.f.) adopta este plan con el objetivo primario de garantizar el acceso a electricidad de las zonas rurales más apartadas del territorio y así mejorar la calidad de vida de comunidades locales, acceso a servicios básicos y al desarrollo integral de las regiones.

En cuanto a Infraestructura o sector energético:

**4.4.2.5 Ley 142 de 1994**, esta ley de servicios público-domiciliarios regula la prestación de los servicios en sus diferentes modalidades para las regiones, incluyendo el sector energético. Establece un conjunto de acciones y competencias en términos de prestación eficiente y equitativa de los servicios.

**4.4.2.6 Ley 697 de 2001**, en relación con la anterior, esta normativa promueve el uso racional y eficiente de la energía para garantizar el abastecimiento por todo el territorio; así mismo, insta al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

**4.4.2.7 Ley 1715 de 2014**, a través de la cual se promueve el desarrollo de las energías de fuente no convencional, especialmente en áreas rurales no interconectadas (Ministerio de Minas y Energía, s.f.). Es de notoriedad para la investigación por su fomento en el uso de energía renovables, otorgamiento de incentivos económicos y la promoción del desarrollo energético en comunidades rurales alejadas para el desarrollo económico y social de las regiones.

#### **4.4.3 Jurisdiccional**

**4.4.3.1 Plan de Desarrollo Departamental “Por Antioquia Firme” 2024-2027**, contempla en sus líneas estratégicas acciones enmarcadas en la seguridad, la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y el desarrollo integral de las comunidades. En el marco de esta investigación, ostenta una línea estratégica de seguridad desde el componente democrático y de justicia, con el objetivo de recuperar el control territorial, la seguridad y convivencia para generar condiciones aceptables para la participación e incidencia territorial y la protección de los derechos de la población. Así mismo, propone en el componente de infraestructura para la equidad y competitividad acciones estratégicas desde la gerencia de servicios públicos para garantizar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales.

## CAPÍTULO III

### 5 Diseño metodológico

A continuación, la tabla 1. Presenta el diseño metodológico que se implementará en esta monografía.

**Tabla 1. Diseño metodológico de la monografía**

<b>Línea de Investigación</b>	<b>Eje temático</b>	<b>Alcance</b>	<b>Diseño</b>	<b>Enfoque de Investigación</b>
Innovaciones sociales y productivas <b>Sublínea:</b> Tejido Empresarial	Gestión estratégica de los proyectos	Descriptivo	No experimental	Cualitativo

Fuente: Elaboración del equipo

#### 5.1 Alcance

La monografía sobre el impacto del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia tiene un alcance descriptivo, caracterizado por la recopilación de datos cualitativos y el análisis de correlación entre variables específicas. Estos se logran, a partir de la identificación de las características del contexto objeto de estudio, como la seguridad, el conflicto armado, la infraestructura energética y el desarrollo socioeconómico para dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

#### 5.2 Diseño

Este estudio se enmarca dentro de un diseño no experimental, dado que no se llevará a cabo la manipulación o control de variables objeto de análisis; por lo tanto, no se realizará experimentación o alteración de las mismas.

### **5.3 Enfoque**

En relación con el objetivo general de esta monografía, se adopta un enfoque cualitativo; a través del cual, se busca analizar y comprender los efectos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el estudio de caso del norte antioqueño, con el fin de proponer estrategias que permitan minimizar riesgos y asegurar la ejecución y sostenibilidad de estos proyectos.

### **5.4 Población y muestra**

Considerando la relevancia de este proyecto para diferentes sectores sociales, se consideró como población a los actores involucrados, interesados y/o afectados por estos proyectos y debido al enfoque cualitativo del estudio, no se trabajó con una muestra estadística representativa, sino con una selección intencional de participantes basada en criterios de pertinencia y experiencia directa con el fenómeno objeto de investigación.

La población objeto de estudio estuvo compuesta por actores sociales, institucionales y comunitarios vinculados directa e indirectamente con los proyectos de infraestructura energética; así como, las dinámicas de orden público que los afecta.

#### **5.4.1 Población**

La población estuvo conformada por:

- Funcionarios públicos
- Comunidad local y empleados locales
- Líderes sociales

#### **5.4.2 Muestra**

Inicialmente, para obtener una comprensión detallada de la percepción, experiencias y perspectivas de la población objeto, se consideró un muestreo probabilístico que permitiera incluir cualquier actor del área de estudio. Debido a las limitaciones logísticas y a la amplia cobertura del proyecto, se realizaron 20 entrevistas en el municipio de San Andrés de Cuerquia como área de enfoque

para una investigación más focalizada y con el fin de darle validez al tercer objetivo específico. Esta decisión se fundamenta en la relevancia del municipio como territorio clave para iniciativas del sector energético.

## **5.6 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información y datos**

Para el desarrollo de esta sección, se emplearon diversas fuentes, técnicas e instrumentos de investigación de recolección de información que permitieron analizar de manera integral los impactos del orden público sobre los proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia. Esta perspectiva permitió investigar las experiencias, percepciones y dinámicas sociales que rodean la relación entre el desarrollo de proyectos de esta índole y las condiciones de seguridad o conflictividad de los territorios.

### **5.6.1 Fuentes de información**

#### **5.6.1.1 Fuente primaria**

La principal fuente de información se obtuvo a través de actores (participantes) vinculados directa e indirectamente a los proyectos de infraestructura energética y entorno al contexto de orden público; por medio de:

- Entrevista semiestructura de manera aleatoria con actores claves como funcionarios, líderes comunitarios y habitantes locales.

#### **5.6.1.2 Fuentes secundarias**

Complementariamente, se acudió a fuentes documentales que permitieron contextualizar y triangular información obtenida de manera directa, a través de:

- Estudios previos de literatura académica sobre el orden público, conflicto armado, conflicto social y proyectos de infraestructura energética
- Información contenida en bases de datos oficiales de la biblioteca virtual de UNIMINUTO como EBSCOhost, Dialnet plus, PROQUEST y SCOPUS; entre otras.

- Reportes de prensa y artículos periodísticos sobre hechos de alteración del orden público en el Norte Antioqueño.
- Informes oficiales e institucionales de entidades como Ministerios de Minas y Energías, Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo

### 5.6.2 Técnicas de recolección de información

Para la recopilación de información se emplearon las siguientes técnicas cualitativas:

- 5.6.2.1 Entrevistas cualitativas:** Posibilitaron la caracterización y profundización de percepciones sociales, caracterizando causas, consecuencias y estrategias frente a las acciones de orden público en el territorio.
- 5.6.2.2 Revisión Documental:** Permitió realizar un análisis sistemático de documentos oficiales, reportes, investigaciones académicas y literatura relacionada para identificar patrones entre variables y su interrelación.
- 5.6.2.3 Mapeo de datos:** El cual permitió conectar, relacionar y organizar la información de diferentes fuentes para establecer temas claves y específicos.

### 5.6.3 Instrumentos utilizados

Los instrumentos aplicados en esta monografía para la recolección de información de datos fueron:

- Guía de entrevista semiestructurada (*anexo 1*)
- Ficha de análisis documental (mapa o matriz de factores)
- Mapa de elaboración de estrategias

## 6 Plan de acción del proyecto

En la siguiente tabla, se detalla el plan de acción del proyecto en relación con los objetivos específicos.

Tabla 2. Plan de acción de la monografía

Objetivos específicos	Actividades	Técnicas de Investigación	Fuentes de Investigación	Resultados
Identificar los principales factores de orden público que afectan el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en los municipios del Norte Antioqueño	Búsqueda en bases e informes oficiales de datos y estudios relacionados con el tema  Revisión de informes	Revisión documental  Mapeo de datos	Artículos académicos, revistas, noticias y documentos oficiales de entidades locales, regionales y departamentales	Identificación y análisis de los factores más comunes de orden público que impactan los proyectos y condensarlos en una matriz
Examinar los impactos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño	Análisis de casos similares en la región o en otras del territorio colombiano  Mapeo de actores clave	Revisión documental  Mapeo de datos	Estudios de caso  Lineamientos de ministerios  Planes de riesgo de los proyectos de infraestructura energética	Matriz de análisis  Mapa de actores clave e intereses
Analizar las principales dificultades que se han presentado con las comunidades locales durante la construcción de proyectos de infraestructura energética	Encuestas a los actores involucrados, interesados y/o afectados  Búsqueda de Información	Entrevista semiestructurada  Revisión Documental	Entrevista aleatoria  Documentos oficiales y artículos	Condensación en matriz y análisis de información sobre las dificultades que se han presentado en la subregión

Definir estrategias que permitan minimizar los efectos del orden público generados por el desarrollo de proyectos energético en el Norte de Antioquia	Análisis documental Diseño y sistematización de estrategia adaptadas al contexto	Mapeo	Fuentes secundarias: Informes gubernamentales y no gubernamentales Estudios académicos	Matriz propuesta de estrategias diferenciadas
---	---	-------	--	---

Fuente: Elaboración del equipo

## 7 Resultados y discusión

**7.1 Objetivo 1.** Identificar los principales factores de orden público que afectan el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética en los municipios del Norte Antioqueño

### 7.1.1 Resultados

La revisión documental sobre el orden público en el Norte Antioqueño nos permitió identificar y mapear los factores clave que afectan los proyectos de infraestructura energética. Esta matriz evidencia una clara relación entre los problemas de orden público, las condiciones locales y las dinámicas sociales, revelando riesgos e impactos directos e indirectos a los proyectos, como se expone a continuación:

**Tabla 3. Matriz de factores, impactos y áreas afectadas en proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia**

Factor	Impactos	Áreas afectadas
Presencia de actores armados ilegales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de escenarios de incertidumbre para contratistas, trabajadores y comunidad local</li> <li>• Extorsiones y amenazas a líderes, comunidad y trabajadores</li> <li>• Estigmatización de las zonas afectadas</li> <li>• Control territorial de rutas y zonas de influencia de las obras</li> <li>• Bloqueos y riesgo de seguridad para el personal</li> </ul>	Social Institucional Económica Seguridad

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos en los cronogramas de ejecución y construcción de los proyectos</li> <li>• Interrupciones en el suministro de materiales</li> <li>• Interrupciones en el suministro de servicios públicos</li> <li>• Aumento de los costos logísticos, técnicos y operacionales</li> </ul> <p>Muestra, caso reportado:</p> <p>La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 011 de 2021 por el creciente accionar y disputa territorial de grupos armados ilegales y del crimen organizado en la subregión del Norte Antioqueño como las AGC, frente 18 y 36 de las FARC-EP, el ELN y los Pachelly. Estos grupos combaten por el control militar, territorial, económico y social de los territorios, afectando a su paso la seguridad de las empresas, los proyectos, el personal y la vulneración de derechos de las comunidades. Los municipios que se identificaron como mayores afectados son San Andrés de Cuerquia, Angostura, Campamento, Toledo y Yarumal.</p> <p>En general, en los últimos años el conflicto afronta un escalamiento como consecuencia de la presencia y expansión de estos grupos desde el occidente de Antioquia y el sur de Córdoba, pasando por el municipio de Ituango (011-2021)</p> <p>Con respecto a esto, a pesar de la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el alcalde del municipio de Ituango manifestó a través de El Colombiano (2025), que el territorio ha sido uno de los municipios del Norte Antioqueño más afectado por la violencia y la disputa entre grupos armados ilegales. Esta situación ha generado hechos victimizantes y todo tipo de violaciones a los derechos humanos, dificultando el turismo comunitario y visibilización del municipio debido a la estigmatización causada por el conflicto armado.</p>	
Conflictos sociales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protestas, manifestaciones y/o bloqueos por inconformidades con los servicios de estos sectores o por razones de diversa índole.</li> <li>• Pérdida de credibilidad de las comunidades</li> </ul>	Social Institucional Económica

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escalada de conflictos sino se gestionan acciones adecuadas</li> <li>• Riesgos de seguridad para la comunidad, trabajadores y contratistas</li> <li>• Riesgo en el suministro de energía para otras regiones</li> </ul> <p>Muestra, caso reportado:</p> <p>Un caso equivalente a este factor son las manifestaciones que se presentaron en el año 2024 en el municipio de Toledo, Norte Antioqueño, en las rutas de acceso vial y fluvial a la central hidroeléctrica Hidroitungo. Los manifestantes, argumentaban incumplimientos de compromisos por parte de la empresa encargada.</p> <p>Este tipo de bloqueos pueden generar afectaciones en diferentes procesos como: el suministro de servicio energético, puesto que, este proyecto produce el 11% de la energía que se necesita en el territorio nacional (El Colombiano, 2024).</p> <p>Por otra parte, el estudio de caso de Angela María Yepes sobre “la participación social en el megaproyecto Hidroitungo: comunidad NUTABE del municipio de Itungo – Antioquia, proporciona una visión sobre cómo fue el proceso de participación de la comunidad en la planificación y ejecución del proyecto. La investigación expone que, a pesar de los acercamientos de la entidad ejecutora, la comunidad fue desplazada de su territorio ancestral sin una consulta previa efectiva, el proceso de participación fue limitado y las estrategias de compensación escasas.</p> <p>Estos casos, evidencian cómo la falta de mecanismo adecuados de participación y compensación puede derivar en conflictos sociales.</p>	
<p>Violencias – Hechos victimizantes<sup>10</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amenazas y desplazamiento forzado de las comunidades</li> <li>• Estigmatización de los territorios afectados</li> <li>• Fragmentación del tejido social</li> <li>• Sabotaje y actos terroristas a la infraestructura energética</li> </ul>	<p>Social</p> <p>Económica</p> <p>Seguridad</p>

<sup>10</sup> Los hechos victimizantes, en el marco de la Ley 1448 de 2011, son cualquier acto u omisión que dañe o ponga en peligro los derechos de una persona. Entre estos, se encuentra: amenazas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidio-masacre, minas antipersonales, hostigamiento, enfrentamientos, violencia sexual; entre otros.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de líneas, torres y suministro de servicios por combates y enfrentamientos</li> <li>• Riesgo de seguridad e integridad de trabajadores y comunidad en general</li> <li>• Interrupción temporal de obras</li> </ul> <p>Muestra, caso reportado:</p> <p>En el 2021 EPM denunció amenazas contra funcionarios directivos y trabajadores que se encontraban desarrollando labores propias en el sector de Hidroituango, específicamente en los municipios de Ituango y Briceño. Ante esta situación, la empresa optó por suspender actividades presenciales en dichas localidades (El Colombiano, 2021).</p> <p>Este tipo de situaciones, generan suspensión temporal de actividades presenciales en varias zonas del territorio Antioqueño hasta poder garantizar la seguridad del personal y los contratistas de las empresas del sector energético.</p>	Derechos humanos
Dificultades en la infraestructura vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos en el transporte y entrega de materiales</li> <li>• Aumento de costos logístico y operativos por desvíos o rutas alternas</li> <li>• Limitada accesibilidad a zonas del proyectos e impacto en movilización del personal</li> <li>• Facilita el control territorial de grupos armados ilegales</li> <li>• Aislamiento de comunidades y zonas rurales</li> <li>• Retrasos en los cronogramas, suministros y servicios</li> <li>• Pérdidas financieras</li> </ul> <p>Muestra, caso reportado:</p> <p>El deslizamiento y pérdida de la banca vial en el municipio de San Andrés de Cuerquia afectó el tránsito hacia el proyecto de Hidroituango, lo que dificultó la llegada de materiales y maquinaria a la obra de energía, incrementando los costos de logísticos y operativos, debido a que, la ruta alterna habilitada solo permitía el paso para vehículos de carga liviana (Noticias BQ, 2025).</p>	Social Económica Territorial Institucional

	Si bien, el factor de dificultades en la infraestructura vial no afecta directamente el orden público, sus consecuencias impactan indirectamente la seguridad al generar tensiones sociales; además, provoca retrasos en el suministro de materiales para los proyectos y aumento de costos logístico por la necesidad de tomar vías alternas.	
--	--	--

Fuente: Elaboración del equipo

### 7.1.2 Análisis

Mediante la técnica de revisión documental<sup>11</sup>, se identificaron y estructuraron en la anterior matriz los principales factores de orden público que afectan e inciden en los proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia.

El análisis de los principales factores, a partir del mapeo de datos y la muestra de casos reportados a través de la prensa, evidencia una relación e interacción entre las dinámicas del orden público, condiciones territoriales y procesos sociales con la implementación de proyectos energéticos. En este sentido, la matriz construida permitió visualizar no solo los elementos de riesgo asociados al contexto, sino también los impactos diferenciados que generan.

Inicialmente, el análisis de factores como **la violencia y presencia de grupos armados** revelan como la alta incidencia y actividades de actores ilegales como la guerrilla, El ELN, los paramilitares y la delincuencia común generan escenarios de incertidumbre en la región para los diferentes actores del sector. Los informes emitidos por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre el conflicto armado en Antioquia, señalan que la presencia de estos grupos armados es uno de los factores más críticos de orden público que afectan la ejecución de proyectos de infraestructura.

Además, los proyectos energéticos en zonas rurales en muchos casos, se ven interrumpidos o retrasados a causa de enfrentamientos, secuestros, desplazamientos y/o amenazas a los trabajadores;

---

<sup>11</sup> Revisión de documentos oficiales, informes de proyectos de infraestructura energética, noticias, estudios académicos y otros textos relacionados con el orden público en el norte Antioqueño.

esto impide el acceso a las zonas donde se llevan a cabo los proyectos, y a menudo obliga a las empresas o autoridades a suspender temporalmente las obras y servicios prestados a las comunidades.

Respecto a los **conflictos sociales**, los documentos analizados evidencian una constante tensión entre las comunidades locales y las empresas de infraestructura energética. En muchos casos, las negociaciones o concertaciones con las comunidades son inadecuadas y los beneficios o compensaciones derivados de estos proyectos son desiguales o se ven limitados por factores como la mala conexión vial entre los municipios, lo que ha generado protestas y bloqueos. Adicionalmente, se identificaron otros factores que pueden ocasionar conflictos sociales durante la ejecución de estos proyectos, como el impacto ambiental percibido, la pérdida de confianza en las empresas, la alteración de actividades económicas o de generación de ingresos y los cambios generados en las dinámicas sociales de las comunidades locales.

En varios documentos consultados, se destaca que las comunidades afectadas han organizado movimientos sociales en defensa de sus derechos, como el caso de Movimiento Ríos Vivos, grupo que ha sido clave en la subregión para visibilizar el impacto de los proyectos hidroeléctricos en las comunidades, especialmente las ribereñas ubicadas aguas abajo.

Por otra parte, los impactos derivados de **hechos victimizantes** ha sido una constante en el territorio. Los desplazamientos, amenazas, extorsiones, enfrentamientos; entre otros actos causados por los grupos armados ilegales presentes en la región, han afectado la estabilidad de muchos territorios donde se desarrollan proyectos de infraestructura energética. Uno de los factores más recurrentes en la región son los desplazamientos forzados, resultado directo de amenazas de actores ilegales; acciones que van dirigidas tanto a la comunidad como a los trabajadores de las empresas del sector energético.

Los informes documentan como las comunidades se ven forzadas a abandonar sus territorios por temor a su seguridad y la de sus familias; esta situación genera, entre otros problemas, falta de

mano de obra, altos costos logísticos adicionales en las zonas afectadas y graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, se identifican **dificultades en la infraestructura vial** que, si bien no es un factor principal de orden público, puede afectarlo indirectamente. Aunque, los proyectos de infraestructura energética suelen traer consigo beneficios y mejoras viales a los territorios; con redes insuficientes o deterioradas, la dificultad de acceso incrementa los costos de las obras y genera retrasos en los cronogramas. Es decir, que en zonas donde la red vial es insuficiente o se encuentra deteriorada debido a diversas problemáticas, se dificulta el acceso a los sitios donde se desarrollan las obras, aumenta la inseguridad y facilita el control de rutas por parte de grupos armados, afectando así el orden público en diversas formas.

En conjunto, estos factores no actúan de forma aislada, sino que se interrelacionan entre sí, generando un entorno desafiante para el desarrollo de proyectos; esto se traduce en impactos directos e indirectos en la infraestructura energética, en los que se resalta:

Impactos directos:

- Las malas condiciones de la infraestructura vial dificultan el acceso a las zonas de las obras, lo que retrasa el transporte de materiales y equipo.
- La obligación de rutas alternas genera incrementos de costos y retrasos logísticos.
- Los bloqueos por parte de grupos armados generan interrupciones en las llegadas de suministros y personal, retrasando las obras. Además, los enfrentamientos entre grupos dan lugar a afectaciones en las torres de redes eléctricas, líneas de transmisión o plantas hidroeléctricas.
- La violencia y los riesgos asociados a la inseguridad y la generación de hechos victimizantes propician pérdida de mano de obra y otras afectaciones en las zonas de influencia
- Retrasos en cronogramas: logísticos, técnicos y operacionales

- Dificultad en el cumplimiento de plazos planificados para la ejecución de actividades
- Impacto en el medio ambiente, que tienden a generar conflictividades sociales
- Interrupción del flujo de materiales importante para las obras, lo que aumenta costos y pérdidas financieras
- Retraso o suspensión de servicios prestados a las diferentes regiones

Impactos indirectos:

- Percepción de inseguridad genera pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, entidades y empresas que presentan estos servicios
- Generación de escenarios de incertidumbre para la viabilidad de estos proyectos
- Inestabilidad social
- Aislamiento de zonas rurales y aumento de las brechas de desigualdad

Los impactos directos e indirectos derivados de los factores como, actividades de grupos armados ilegales, conflictos sociales, hechos victimizantes y dificultades de infraestructura vial no solo afectan la ejecución y viabilidad de los proyectos de infraestructura energética, sino que también tienen repercusiones a nivel social, económico y ambiental.

Los resultados obtenidos de la revisión documental coinciden con diversos estudios previos sobre los efectos del orden público en el desarrollo de proyectos en zonas marcadas por el conflicto. La violencia generada por los grupos armados ilegales sigue siendo uno de los principales factores que perturban el orden público y que generan escenarios de incertidumbre para la ejecución de proyectos de infraestructura energética, como se ha documentado en informes emitidos por entes gubernamentales y no gubernamentales.

En suma, los factores analizados en este capítulo coinciden con hallazgos de investigaciones previas y evidencian cómo la violencia, los hechos victimizantes, los conflictos sociales y otros factores

de inestabilidad afectan directa e indirectamente el desarrollo de proyectos de infraestructura en el norte de Antioquia. Un ejemplo representativo de esto, es el caso de la central hidroeléctrica Porce III, donde se evidenció cómo los conflictos sociales y las tensiones derivadas del orden público influyeron en las decisiones institucionales sobre el reasentamiento y compensación de las comunidades afectadas, alterando así el curso del proyecto (Muñoz Gaviria, p.230).

Estos resultados sugieren la importancia de abordar estos factores desde un enfoque integral para garantizar que los proyectos energéticos no solo sean viables desde el punto de vista técnico y operacional, sino también desde aspectos de seguridad y sostenibilidad social. Por lo tanto, en el segundo objetivo se propone examinar estos impactos con un enfoque en las afectaciones directas hacia el ciclo de vida de estos proyectos.

## **7.2 Objetivo 2.** Examinar los impactos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño

### **7.2.1 Resultados**

En este objetivo se presentan los hallazgos relacionados con los efectos que ha tenido la situación del orden público sobre el desarrollo, ejecución y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura energética en el Norte Antioqueño. Para ello, se realizó un análisis documental por medio de informes oficiales, alertas tempranas de la defensoría del pueblo y bases de datos sobre conflictividad.

Como resultado de este proceso investigativo, una vez identificado los factores, impactos y áreas afectadas en la tabla 2 del objetivo anterior, asociados al orden público que inciden en la zona objeto de estudio, se procedió a examinar de manera sistemática los efectos que han generado en el ciclo de vida de proyectos de infraestructura en la subregión.

Este análisis se centró en comprender cómo las condiciones de orden público, específicamente la presencia de grupos armados, la conflictividad social, tensiones comunitarias, entre otros aspectos,

han afectado las etapas de ciclo de vida de los proyectos; así como, los actores involucrados en todo el proceso. Para ello, se optó por hacer un mapa de hallazgos y uno de actores clave como complemento con la revisión de estudios que evidencien estas afectaciones.

A continuación, se evidencian los principales hallazgos encontrados en el objetivo específico:

**Tabla 4. Hallazgos de efectos del orden público en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura energética**

<b>Fases del Proyecto</b>	<b>Aspectos</b>	<b>Tipos/evidencias</b>
<b>Planeación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemáticas en los procesos de consulta previa y obtención de información territorial.</li> <li>• Dificultades en los diagnósticos iniciales y participativos</li> <li>• Inconvenientes de acceso del personal a las zonas de influencia de los proyectos</li> <li>• Pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, lo que genera rechazo social.</li> <li>• Retrasos en los inicios o cronogramas de las obras</li> <li>• Conflictividad social</li> <li>• Conflicto armado interno</li> </ul>	<p>Según la alerta temprana No. 004 de 2020 de la Defensoría del pueblo advierte riesgos inminentes para la población de los municipios de Briceño e Ituango (<i>Anexo 2</i>); lo que limita el trabajo técnico previo e impide un adecuado relacionamiento con la comunidad local.</p>
<b>Ejecución</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta presencia y actividades de los grupos armados ilegales para el control de rutas de movilidad y comunicación, perpetuando acciones de sabotaje a la infraestructura o redes de suministro de servicios</li> </ul>	<p>Se analizan dos casos del proyecto hidroeléctrico Hidroituango desde perspectivas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El artículo sobre responsabilidad extracontractual del Estado por los posibles daños</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de acciones victimizantes a las comunidades y personal de las empresas como amenazas y extorsiones lo que dificulta el acceso a zonas rurales para la prestación de servicios</li> <li>• Bloqueos sociales por falta de cumplimiento de acciones y acuerdos previos establecidos, lo que implica demoras en insumos, retrasos en cronogramas y la ralentización de los procesos</li> <li>• Emergencias generadas por fallas técnicas o logísticas en el desarrollo de los proyectos que generan afectaciones sociales, ambientales y económicas.</li> </ul>	<p>generados a la población a causa del proyecto</p> <p>Hidroituango por (Piza Guerrero &amp; Lara Hernández, 2020)</p> <p>2. Hidroituango: un desastre socioambiental con responsabilidad internacional por (Isabel Cristina Zuleta, 2021)</p> <p>Estos artículos, documentan como durante las etapas del ciclo de vida del proyecto se generaron diferentes afectaciones sociales y una crisis por fallas técnicas que generaron grandes problemáticas a las comunidades, especialmente aguas abajo, y al medio ambiente. Por lo cual, a nivel comunitario se han consolidado grupos para la defensa de los derechos de la población y se han presentado bloqueos por incumplimiento de compromisos, de compensación y reparación de sus derechos individuales y colectivos.</p>
<b>Operación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daños a la infraestructura por acciones de combates y/o enfrentamientos entre estructuras armadas, afectando el suministro de energía a todas las regiones de</li> </ul>	<p>La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre conflictividad en el sector Minero-Energético en Colombia (2024), señala que la operación en sí de los proyectos no elimina las problemáticas</p>

	<p>influencia y causa pérdidas económicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflictividad social por incumplimiento de acuerdos y redistribución desigual de beneficios que trasciende a bloqueos y protestas.</li> </ul>	<p>evidenciadas; puesto que, estas actividades dan lugar a transformaciones del entorno que puede agudizar las tensiones sociales, del medio ambiente y de desarrollo que al final tiende a convertirse en conflictos sociales si no se cumplen los acuerdos establecidos y si no se generan acciones de restablecimiento de derechos.</p>
--	---	--

Fuente. Elaboración del equipo

## 7.2.2 Análisis

### 7.2.2.1 Fase de planeación

Durante esta etapa los proyectos de infraestructura enfrentan dificultades significativas por los contextos de complejidad sociopolítica en los que se desarrollan (Ika, Rego, Holzmann, & Gil, 2023). Las principales problemáticas que enfrentan son las asociadas al acceso a la información territorial y la gestión social del entorno.

En varios municipios del norte antioqueño, la presencia de grupos armados ilegales ha limitado la capacidad institucional para realizar estudios de prefactibilidad, recorridos técnicos y consultas comunitarias previas. Situación que ha propiciado una desconfianza por parte de la población, especialmente de las zonas rurales, que perciben las iniciativas como decisiones impuestas.

Una de las evidencias más relevantes sobre esta situación es la alerta temprana No. 004 de 2020 emitida por la Defensoría del pueblo, en la cual se advierte sobre el riesgo de confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial y social en los municipios de Briceño e Ituango, como consecuencia del reacomodamiento y surgimiento de nuevas estructuras armadas, lo cual genera una fuerte inestabilidad y recrudece la violencia en estas zonas priorizadas para el desarrollo energético.

En dicha alerta, se señala que los municipios cuentan con una importante riqueza hídrica que los convierte en fuentes estratégicas de producción de energía y su ubicación geográfica permite el intercambio y conexión con otras subregiones de Antioquia y con el Departamento de Córdoba; estas características los han convertido en objeto de interés para estos grupos armados, que en su proceso expansivo han accedido a corredores de comunicación y movilidad afectando a su paso a las comunidades y el inicio adecuado de estos proyectos.

Además, en esta etapa que es clave para el diseño técnico y la concertación social de los proyectos, se identificó que la conflictividad social influye significativamente en el orden público y en el todo el ciclo de vida de los proyectos. Esta conflictividad no se limita a la presencia de grupos armados, sino que también abarca otros factores de orden público como las tensiones sociales entre comunidades e instituciones, debido a desacuerdos con las empresas promotoras de estos proyectos y por la falta de información clara y oportuna sobre su alcance. Como dato relevante la (Defensoría del Pueblo , 2024), dio a conocer que para el año 2023 los conflictos sociales en el sector minero-energético aumentaron un 46%, en los que se desataca eventos relacionados con el respeto de los derechos a la participación de las comunidades entorno a los proyectos minero-energéticos.

#### **7.2.2.2 Fase de ejecución**

Los impactos más visibles del orden público se presentan durante esta fase y la última, donde el orden público se hace más visibles. Esto se debe a que coincide con un aumento en la conflictividad social, especialmente en las zonas donde persiste disputas territoriales, escasa presencia estatal e incumplimiento de los acuerdos establecidos. Estas conflictividades se asocian a múltiples causas como la insatisfacción con las instituciones, la falta de participación y los conflictos territoriales preexistentes.

En general, estos factores afectan directamente la continuidad de las obras, la seguridad del personal técnico, la movilidad de insumos y las relaciones entre las instituciones con las comunidades. Entre los efectos más destacados se encuentran la suspensión temporal de actividades por bloqueos

comunitarios, las amenazas al personal, los daños a la infraestructura por acciones de grupos armados y el aumento de los costos operativos de los proyectos (Henok & Tshela, 2024).

Un impacto notable, evidenciado en estudios como los de Piza Guerrero y Lara Hernández (2020) e Isabel Cristina Zuleta (2021) son las conflictividades sociales que han surgido y las emergencias generadas por fallas técnicas o logísticas durante el desarrollo del proyecto. Estos autores, exponen como en los diferentes procesos del proyecto de Hidroituango se generaron diversas afectaciones sociales y una crisis por fallas técnicas que derivaron en impactos negativos para miles de habitantes aguas abajo, lo que activo una amplia discusión sobre responsabilidad estatal.

Por lo tanto, es crucial considerar todos estos factores no solo en la planificación del proyecto sino a lo largo de todo su ciclo, más allá de aspectos administrativos logísticos y operativos para evitar riesgos a mediano y largo plazo que puedan afectar la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura energética, así como los beneficios, intereses y derechos de la población.

### **7.2.2.3 Fase de operación**

Una vez finalizado los proyectos de infraestructura energética, el sector sigue enfrentando desafíos relacionados con el orden público que han sido especificado en las anteriores etapas. En este contexto, los conflictos no resueltos en fases anteriores tienden a reemerger en protestas, bloqueos y reclamos por incumplimiento a los acuerdos establecidos en su momento; lo que perpetua un clima de desconfianza hacia nuevas intervenciones, especialmente si no se incluye de manera integral componentes de dialogo y socialización con las comunidades locales.

En general, las situaciones de orden público, especialmente la presencia de actores armados afecta directamente los procesos de consulta previa y concertación comunitaria; esto se debe al temor de algunas comunidades para participar en espacios de socialización, mientras que el personal de campo enfrenta limitaciones de acceso a ciertos territorios por las restricciones e incluso amenazas y extorsiones generadas por estos grupos.

El contexto de orden público en el norte antioqueño genera impactos importantes en las fases de los proyectos de infraestructura energética, lo que exige una gestión integral de los diferentes factores de riesgo expuestos. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo constituyen un componente clave para conocer el territorio e integrar de forma obligatoria esos riesgos en sus estudios previos, planificación y desarrollo.

El análisis anterior, permitió identificar a los principales actores clave en el desarrollo de estos proyectos y constituye un componente relevante para el objetivo; por lo que se elabora una matriz de actores:

**Tabla 5. Matriz de actores clave**

<b>Actor</b>	<b>Intereses / expectativas</b>	<b>Influencia</b>
Comunidades locales /líderes sociales	Generación de Empleo Derechos a la participación y consulta previa Minimización de impactos sociales y ambientales Inversión social	Alta
Autoridades locales	Reconocimiento y visibilización del territorio Inversión social Generación de desarrollo local y turismo Obtención de regalías	Alta
Empresas/ sector energético	Desarrollo de proyectos energéticos Cumplimiento de cronogramas y actividades establecidas Rentabilidad y generación de servicios Prestación de servicios a diferentes regiones del país.	Alta
Organizaciones sociales/ambientales	Veeduría para el cumplimiento y no vulneración de los derechos de las comunidades Protección del medio ambiente	Alta

Grupos armados ilegales	Control y expansión territorial Extorsión y amenazas para control de rutas de comunicación y social	Alta (riesgo)
Entidad de protección de derechos	Vigilancia y cumplimiento de los derechos sociales, ambientales y económicos. Control y vigilancia en materia de seguridad	Alta

Fuente: elaboración del equipo

**7.3 Objetivo 3.** Analizar las principales dificultades que se han presentado con las comunidades locales durante la construcción de proyectos de infraestructura energética

### 7.3.1 Resultados

Para el desarrollo de este objetivo específico, se aplicaron entrevistas semiestructuradas (*anexo 3*) dirigidas a actores locales clave con conocimiento territorial, social y político de la región; respetando en todo momento la privacidad y confidencialidad de los participantes.

Estos actores en su mayoría funcionarios locales, líderes comunitarios y comunidad local, aportaron perspectivas y conocimientos valiosos sobre las dinámicas contextuales que permean los proyectos de infraestructura energética.

La información recogida en el proceso metodológico, fue sistematizada y organizada por secciones temáticas, lo que facilitó no solo la clasificación de las respuestas, sino también la identificación de patrones comunes y diferenciados en las entrevistas.

A continuación, se presenta una matriz resumen (*anexo 4*) con los hallazgos más relevantes obtenido a partir de las entrevistas:

**Tabla 6. Resumen de hallazgos por pregunta**

Sección	Pregunta	Hallazgos Relevante	Actores
<b>1. Contexto General</b>	¿Cuál es su visión sobre el estado actual del orden	Los hallazgos más comunes evidenciados en la pregunta fueron:	Líderes Comunidad Local

	público en su comunidad?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales que generan temor e inestabilidad</li> <li>• Incremento de la inseguridad por hechos como extorsiones, muertes y violencia en zonas rurales</li> <li>• Percepción de baja presencia institucional o falta de control de autoridades</li> </ul> <p>En general se percibe una situación de inseguridad en el territorio causada principalmente por la presencia y actividades de grupos armados ilegales. Situación que generan pérdida de credibilidad y desconfianza hacia autoridades.</p>	Funcionarios
	¿Cómo perciben la relación entre el orden público y el desarrollo de proyectos de infraestructura?	<p>Exponen que existe una relación directa porque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El orden público afecta positiva o negativamente el desarrollo de estos proyectos, especialmente en los lugares donde hay mayor presencia de grupos armados</li> <li>• Los conflictos generan miedo y limitan la participación y desarrollo adecuado de las actividades</li> <li>• El desarrollo de estos proyectos puede mejorar la seguridad en algunas zonas y dinamizar la economía</li> </ul> <p>En común se manifiesta que los proyectos se retrasan o las actividades y servicios se suspenden debido a la inseguridad</p>	Lideres Comunidad Local Funcionarios
	¿Ha habido proyectos de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia de infraestructura ya instalada por parte de EPM</li> </ul>	Lideres

<b>2. Impacto en proyectos de infraestructura</b>	infraestructura de redes de energía en su comunidad? Si es así, ¿cuáles?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tienen varios proyectos por la alta presencia de centrales y micro centrales hidroeléctricas en el municipio como el de Energo-Pro (Línea de 17 km)</li> <li>• Otros proyectos identificados como: La Chorrera, Chorreritas, Celsia, Hidroitungo con expansión en zonas rurales</li> <li>• Algunos entrevistados reportan mejoras específicas como cambio de luminarias a LED</li> <li>• También se identifican comunidades sin intervención directa</li> </ul>	Comunidad Local Funcionarios Trabajadores del sector
	¿Qué retos han enfrentado estos proyectos debido a problemas de orden público?	Los patrones más comunes identificados son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunos participantes manifiestan que por el contexto se presentan amenazas, extorsiones “pago de vacunas” y daños de material e infraestructura</li> <li>• Paros, protestas y cierres en las vías que comunican con los proyectos</li> <li>• Restricciones de acceso a territorios y dificultades en el traslado de materiales y personas</li> <li>• Reiteran que las zonas con menor presencia de las autoridades son donde se genera mayor riesgo e incertidumbre</li> </ul>	Lideres Comunidad Local Funcionarios
	¿Cómo han afectado estos problemas a la comunidad en términos de acceso a la energía?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El mayor problema identificado es relacionado con el orden público que dificulta el acceso de estos proyectos en las zonas más necesitada, lo que afecta la calidad de vida</li> <li>• Restricciones de los técnicos a las veredas, lo que implica retrasos en reparaciones</li> </ul>	Comunidad local Lideres Funcionarios

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrasos de la expansión del servicio energético a zonas rurales y dispersas</li> <li>• Daños a la infraestructura por enfrentamientos armados, lo que perjudica el acceso continuo a la energía</li> </ul>	
<b>3. Perspectivas y soluciones</b>	¿Qué medidas consideran necesarias para mejorar el orden público en relación con estos proyectos?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mayor parte de los participantes coinciden en que se debe tener mayor presencia y acompañamiento de la fuerza pública “ejército y policía”.</li> <li>• Fortalecer la presencia del Estado con enfoque institucional, social y educativo.</li> <li>• Garantizar la protección a los líderes comunitarios y trabajadores</li> <li>• Propiciar más espacios de sensibilización y participación de la comunidad en los proyectos</li> <li>• Mesas de diálogo con grupos armados</li> </ul> <p>En general manifiesta la necesidad de aumento de la presencia de las instituciones locales en articulación con las autoridades competentes en materia de seguridad y generar espacios de diálogo, consulta previa y mayor participación de las comunidades.</p>	Líderes Comunidad Local Funcionarios Trabajadores del sector
	¿Qué papel deberían jugar las autoridades locales y nacionales en la mitigación de estos problemas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación interinstitucional con otras entidades (nacional, regional y local) para garantizar la seguridad de la comunidad y trabajadores de las empresas</li> <li>• Fortalecimiento institucional y presencia de fuerza pública</li> </ul>	Líderes Comunidad Local Funcionarios Trabajadores del sector

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberían implementar programas educativos de sensibilización y desarrollo social</li> <li>• Servir de mediadores entre proyectos y comunidades, garantizando la participación de todos los actores claves e interesados para apoyo del desarrollo local</li> </ul>	
	¿Qué recomendaciones darían a las empresas encargadas de la implementación de proyectos de infraestructura energética?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento de relaciones comunitarias y trabajar de la mano con la institucionalidad</li> <li>• Realizar estudios de seguridad y diagnósticos sociales previos a las intervenciones</li> <li>• Priorizar la sostenibilidad y el respeto por el entorno y cultura de la región</li> <li>• Mantener comunicación constante con las comunidades, especialmente con las zonas rurales y autoridades locales</li> <li>• Contratar mano de obra local</li> <li>• Establecer protocolos de seguridad para los trabajadores y proteger el medio ambiente</li> </ul>	Lideres Comunidad Local Funcionarios
<b>4. Cierre</b>	¿Qué impactos ha observado, desde su experiencia, en la comunidad local respecto a la implementación de proyectos de infraestructura energética?	<p>De acuerdo a la pregunta se diferencian dos respuestas (patrones comunes) en las entrevistas:</p> <p><b>Impactos positivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de generación de empleo local, beneficios sociales y económicos para la región</li> <li>• Desarrollo, inversión social y dinamización de la economía</li> <li>• Mejores condiciones de acceso a los servicios y calidad de vida</li> <li>• Crecimiento del comercio</li> </ul>	Lideres Comunidad Local Funcionarios

		<p><b>Impactos negativos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de problemáticas ambientales y sociales</li> <li>• Cambios en el entorno ambiental y en actividades económicas tradicionales como la agricultura y la ganadería</li> <li>• Tensiones y desconfianza en algunos casos, debido a la falta de inclusión</li> </ul>	
	¿Hay algo más que deseen agregar sobre este tema?	<p>A pesar de las situaciones expuestas, muchos manifiestan que estos proyectos traen diferentes beneficios para las regiones y comunidades locales como la generación de empleo o contratación de mano de obra local y mejores condiciones de vida</p> <p>También exponen que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estos proyectos generan grandes impactos sociales y económicos</li> <li>• Es importante que estos proyectos no solo se centren en la instalación técnica, sino que incluyan procesos de desarrollo social y comunitario</li> <li>• Se debe realizar una adecuada articulación entre las diferentes instituciones para generar acciones conjuntas en pro de fortalecer la atención a escenarios de riesgos causados por el fortalecimiento de los grupos armados</li> </ul>	Comunidad local

Fuente: Elaboración del equipo con información extraída de las entrevistas

### 7.3.2 Análisis

A continuación, se detallan los resultados organizados por secciones, los cuales reflejan los ejes centrales de las situaciones identificadas asociadas a problemáticas y percepciones positivas:

### 7.3.2.1 Contexto general

Los participantes coinciden en señalar que el orden público en el territorio es inestable y condicionado por factores sociales y territoriales como la persistente presencia de grupos armados ilegales que genera escenarios de riesgo para la población y trabajadores de las empresas. Uno de los entrevistados de la zona rural manifestó que *“el desarrollo del proyecto en estas zonas donde la presencia del estado es casi nula, ya es un reto, debido a las expectativas que se generan por parte de las comunidades y por la disputa territorial por parte de los grupos armados”*. En conjunto, existe una percepción directa de que el deterioro del orden público afecta negativamente el adecuado desarrollo de los proyectos, especialmente en las zonas rurales y dispersas del territorio, lo que genera desconfianza hacia las instituciones, suspensiones temporales de servicios y en algunos casos ausencia de las empresas en los lugares alejados.

### 7.3.2.2 Impacto en proyectos de infraestructura

Los impactos identificados en las comunidades son diversos y del análisis se exponen dos categorías relevantes: positivos y negativos. Por una lado, algunos afirman que los proyectos traen consigo un serie de beneficios sociales y económicos para la región, como expone un funcionario del área urbana: *“los impactos son positivos porque traen desarrollo, trabajo, inversión social y dinamiza la economía local”* y así lo reitera un habitante local con el argumento de que *“los impactos han sido positivos en su mayoría: mejora en la calidad de vida, mayor acceso a servicios, desarrollo de actividades productivas y educativas”* (zona urbana, 2025). Por otro, hay quienes manifiestan que el impacto es negativo por *“...el daño que le hacen al medio y el cambio de nuestros trabajos ya que estamos acostumbrados al campo, al café y al ganado y muchas veces esto se ve afectado”* (habitante local, zona rural, 2025).

Esto evidencia, la necesidad de promover enfoques integrales en la planeación y ejecución de todo tipo proyectos sociales, en este caso de los energéticos.

### 7.3.2.3 Perspectivas y soluciones

Las soluciones planteadas por los entrevistados van desde el fortalecimiento y articulación institucional y la presencia de mayor fuerza pública en el territorio, hasta la generación de espacios de diálogo, sensibilización y participación de las comunidades en los proyectos que se desarrollan en la región. Sugieren que las autoridades asuman un rol más activo para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo local; y finalmente que, las empresas del sector energético deben “... *trabajar con la institucionalidad y no permitir ceder a cualquier pretensión que fortalezca la ilegalidad en los territorios*” (funcionario, zona urbana, 2025).

Posteriormente, recomiendan realizar diagnósticos sociales y ambientales para conocer las diferentes dinámicas del territorio y generar mesas de diálogo con grupos armados para el adecuado desarrollo de los proyectos.

### 7.3.2.4 Cierre

Desde la perspectiva y experiencia de los participantes, se concluye que las problemáticas más relevantes se relacionan con factores de seguridad, conflictos territoriales y ambientales, que implican no solo contratiempos en el ciclo de vida de los proyectos, sino que generan percepciones de juicio sobre los beneficios reales de estos, los que se traduce en conflictividades sociales.

El tema de orden público requiere de un análisis amplio e integral, como bien lo expone un participante “*es importante que los proyectos de infraestructura energética no se limiten a la instalación técnica, sino que estén acompañados de procesos de desarrollo social y comunitario, para que verdaderamente generen transformación en los territorios*” (líder local, zona urbana, 2025)

El análisis evidencia que una adecuada gestión de la comunicación con las comunidades, acompañada de procesos o estrategias integrales de seguridad y mitigación de los riesgos asociados al orden público es clave para el desarrollo adecuado de los proyectos.

Finalmente, tras el análisis de las entrevistas y las perspectivas compartidas por los diferentes participantes, se identifican dos componentes clave dentro del orden público que puede generar impactos en los proyectos de infraestructura en el Norte Antioqueño: la presencia de grupos armados ilegales y la participación comunitaria.

**a. Problemas de orden público por presencia de grupos armados ilegales**

Las actividades delictivas de los actores armados que hacen presencia en el norte antioqueño, ha sido el principal y mayor componente de orden público que impone desafíos para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética y que generan barreras para las comunidades locales. Los participantes señalaron que en varias zonas de los territorios persisten dinámicas de inseguridad y generación de violencia que van desde amenazas, extorsiones y restricciones para el ingreso del personal de algunas empresas a las zonas, a causa del accionar de estos grupos. Esta situación ha generado tensiones y obstáculos para el desarrollo de los proyectos, debido a que, tanto las empresas como comunidades se ven expuestas a múltiples factores de riesgo. Algunas personas manifestaron que, en ciertos casos, las obras eran suspendidas o ralentizadas por amenazas, extorsiones o disputas territoriales, como lo indicó un habitante local *“actualmente, el orden público en la comunidad es inestable. Aunque hay momentos de tranquilidad, persisten situaciones relacionadas con la presencia de grupos armados, extorsiones y enfrentamientos, lo que genera temor e incertidumbre”* (2025). Estos hechos exponen cómo la violencia generalizada no solo pone en riesgo la vida e integridad de las comunidades, sino que limitan el alcance de estos proyectos.

finalmente, hay quienes afirman que los proyectos de infraestructura energética y el orden público tienen una relación intrínseca, *“es una relación directa debido a que en algunas oportunidades se han dejado de realizar proyectos de desarrollo por la presencia de grupos armados”* (funcionario local, zona rural, 2025)

**b. Socialización y participación comunitaria**

Este segundo componente es fundamental para el análisis de este objetivo; si bien no fue un factor frecuente en las respuestas de los participantes, la falta de una sólida consulta y participación con las comunidades, se convierte en un componente clave para la prevención de conflictos sociales.

Algunos entrevistados destacaron el papel que deben cumplir las autoridades locales en materia de educación y comunicación efectiva con las comunidades; entre estas, señalan que *“la educación es la base para mitigar este tipo de problemas, las autoridades locales deberían realizar mayor presencia en las comunidades”* (habitante local, zona rural, 2025).

Con relación a esto, otra perspectiva enfatizó en la importancia de generar relaciones y articulación interinstitucional y con las comunidades; se destacó la importancia de *“aumentar el relacionamiento con las comunidades y crear sinergia con las empresas privadas del sector para fortalecer a las comunidades”* (funcionario, zona urbana, 2025). Lo que sugiere un enfoque integral, que involucre tanto a las entidades públicas locales y las del sector empresarial para contribuir al bienestar social y a mejorar las condiciones de vida de la población. Reforzando esta idea, un participante reiteró la necesidad de fomentar y fortalecer ese relacionamiento, pues es sustancial *“que prioricen y fortalezcan las relaciones comunitarias, las relaciones con las autoridades y realicen jornadas de concientización sobre la importancia y el desarrollo que traen los proyectos a los municipios”* (líder local, zona urbana, 2025).

Este análisis resalta la necesidad de generar espacios de participación y sensibilización con las comunidades sobre los proyectos de desarrollo energético implementados en el territorio; además, reitera la importancia de la articulación efectiva entre instituciones públicas y privadas en pro del beneficio de las comunidades y para minimizar posibles conflictos sociales.

En definitiva, las entrevistas realizadas permitieron identificar tanto las dificultades como las potencialidades que las comunidades del sector del norte antioqueño seleccionado, perciben frente a los proyectos de infraestructura energética. Entre las problemáticas más destacadas se encuentran la

inseguridad (conflictos), la exclusión de las zonas más alejadas en la toma de decisiones, los impactos ambientales y la desconfianza institucional. No obstante, también se evidencia aportes favorecedores que ven estos proyectos como una oportunidad para generar empleo, inversión social, dinamizar la economía y para el desarrollo de la región.

La información obtenida en el proceso investigativo de los anteriores objetivos, permitió establecer una base importante para la definición de las estrategias orientadas a minimizar los efectos del orden público en los proyectos de infraestructura energética en la subregión, en la siguiente sección.

#### **7.4 Objetivo 4.** Definir Estrategias que permitan minimizar los efectos del orden público en el desarrollo de proyectos energético en el Norte de Antioquia

##### **7.4.1 Resultado**

Una vez identificados los principales impactos generados por el orden público para el desarrollo de proyectos de infraestructura energética del Norte Antioqueño, los actores clave y las causas estructurales de estos impactos, se identificaron patrones comunes que permitieron plantear las estrategias orientadas a minimizarlos. Estas estrategias surgen de un análisis cruzado de hallazgos obtenidos y de las percepciones de los actores claves, en los que se identificaron problemáticas estructurales, tensiones territoriales y sociales que requieren ser abordadas.

**Tabla 7. Estrategias de minimización de efectos del orden público en proyectos de infraestructura energética**

<b>Estrategia</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Acciones clave</b>	<b>Observaciones/justificación</b>
Consulta previa y participación comunitaria efectiva	Garantizar la inclusión y proteger los derechos de participación de la comunidad local en los diferentes ciclos de vida de los proyectos	Implementación de mecanismos de participación, consulta previa y comités de seguimiento	Propiciar estos espacios de participación ciudadana representa un avance en materia de derechos y contribuye a minimizar los conflictos sociales

Fortalecimiento institucional local	<p>Generar acciones interinstitucionales que aumenten la capacidad técnica y de respuesta de las autoridades locales y otras instituciones ante situaciones de alteración de orden público</p> <p>Disminuir la escalada de conflictos a través de acciones formativas en resolución de conflictos</p>	<p>Realizar diferentes campañas y capacitaciones para resolución de conflictos, creación y/o activación de rutas de atención interinstitucional y articulación con diferentes entidades del nivel local, regional y nacional</p>	<p>A través de la articulación entre instituciones y empresas desarrolladoras, se pueden implementar labores integrales y diversificadas para atender las demandas sociales que se van presentando en los territorios referentes a los beneficios, repercusiones e impactos de estos proyectos.</p>
Inversión social focalizada	<p>Propiciar beneficios diferenciados y sostenibles que posibiliten el desarrollo local</p>	<p>Desarrollo de programas de inversión social como compensación por las intervenciones, de acuerdo a las necesidad e intereses de la población</p>	<p>Este factor fomenta la credibilidad de las instituciones y los proyectos de desarrollo local. Además, generalmente la inversión social se alinea con los objetivos de las empresas en cuanto a compensación de sus impactos desde el componente social.</p>
Gestión de riesgos	<p>Elaborar planes de contingencia y gestión del riesgo para prevenir acciones relacionados con alteración de orden público y minimizar su impacto en el desarrollo de estos proyectos</p>	<p>Articulación con autoridades competentes en seguridad para actualizar información sobre escenarios de riesgo</p> <p>Implementación de protocolos de</p>	<p>Permite disminuir factores de riesgo en toda y cada una de las etapas del proyecto y garantiza su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo</p>

		respuesta y sistema de evaluación del riesgo por medio de coordinación con autoridades locales	
Comunicación asertiva y accesible	Mejorar la información entre las empresas, autoridades locales y comunidad en general, para que esta sea asequible a los diferentes grupos poblacionales	Diseño de canales permanentes de comunicación efectiva, asertiva y accesible sobre información del proyecto y atención oportuna de quejas y reclamos	Una comunicación fluida y alineada con las necesidades e intereses de la comunidad local facilita la construcción de acuerdos y la toma de decisiones basadas en sus propios contextos y realidades para el desarrollo regional.

Fuente: elaboración del equipo

#### 7.4.2 Análisis

A partir de la matriz de estrategias presentada, se realiza un análisis individual de cada una considerando el contexto particular de la región objeto de estudio y los principales desafíos identificados en la implementación de estos proyectos.

Para la implementación efectiva de estas estrategias de minimización de impactos, se deben considerar los factores internos y externos que afectan a los proyectos, así como las características de los territorios y las comunidades locales.

##### 7.4.2.1 Consulta previa y participación comunitaria efectiva

La falta de consulta previa y participación de las comunidades ha sido una de las principales causas de conflictividad social en la ejecución y operación de proyectos energético en el territorio; en el Norte Antioqueño las poblaciones alejadas del casco urbano y dispersas en las zonas rurales tienen necesidades específicas y diferenciadas que hacen que estas estrategias tomen mayor relevancia.

El desconocimiento de estas necesidades e incumplimiento de estos procesos participativos generan insatisfacción en las comunidades, lo que puede derivarse en desconfianza hacia estos, protestas y bloqueos. Por lo tanto, es importante garantizar la inclusión y proteger los derechos de participación de la comunidad local en los diferentes ciclos de vida de los proyectos.

#### **Estrategias específicas**

- Implementar procesos de consulta previa y participación comunitaria diferenciada y amplia que abarque las zonas más alejadas de los municipios del norte antioqueño, especialmente, donde se implementan estos proyectos.
- Disponer de comités de participación comunitaria con enfoque diferencial y territorial
- Implementar rutas de consulta inicial con las comunidades afectadas directa e indirectamente e interesadas.
- Generar procesos formativos y educativos con líderes comunitarios y sociales sobre el desarrollo de estos proyectos para su posterior replica en las comunidades.

#### **7.4.2.2 Fortalecimiento institucional local**

Las entidades e instituciones locales deben fortalecer sus recursos técnicos, humanos y logísticos para enfrentar los desafíos y cambios que trae consigo la implementación de grandes proyectos energéticos, específicamente cuando surgen afectaciones al territorio en términos ambientales, culturales y estructurales que generan tensiones sociales. Por lo tanto, es sustancial que las empresas desarrolladoras generen capacidades mínimas para la gestión efectiva de los conflictos sociales emergentes y la desconfianza de las comunidades en articulación con las administraciones locales.

#### **Estrategias específicas**

- Establecer comités de articulación institucional a nivel local, regional y nacional con participación de diferentes entidades, incluido el sector energético.

- Desarrollo e implementación de planes de formación y educación para funcionarios, líderes comunitarios y comunidad local sobre resolución de conflictos, participación ciudadana, desarrollo social, entre otros componentes formativos que se requieran en cada contexto.
- Establecer un componente de fortalecimiento institucional en los proyectos de desarrollo energético adaptable a los diferentes contextos en los que se implementan.
- Crear rutas de atención ciudadana con enfoque diferencial

#### **7.4.2.3 Inversión social focalizada**

En contextos ampliamente potenciales en generación de energía, como el norte antioqueño, las comunidades esperan que los grandes proyectos que allí se implementan generen beneficios perceptibles y diferenciados para toda la población. La falta de una inversión social acorde a las necesidades e intereses de los territorios pueden generar y agravar tensiones sociales ya existentes.

#### **Estrategias específicas**

- Realizar diagnóstico sociales y territoriales iniciales con participación directa de las comunidades impactadas directa e indirectamente
- Implementar estrategias de compensación social y ambiental en las zonas directamente intervenidas para el desarrollado integral de toda la región, que vayan desde iniciativas en salud, espacios para la participación ciudadana, apoyo a proceso productivos y de emprendimiento, construcción y/o dotación de infraestructura, mejoramiento vial, restauración ambiental; hasta garantizar el acceso a los servicios del sector energético de las zonas más alejadas de la región.
- Articulación entre instituciones locales con empresas del sector para efectuar campañas y socialización de acciones implementadas

#### **7.4.2.4 Gestión de riesgos**

En este contexto del Norte Antioqueño que ha sido marcado por la violencia e inseguridad, con presencia de grupos armados ilegales y tensiones sociales fluctuantes, es imperioso que las empresas de proyectos energéticos implementen un estructurado proceso de identificación, análisis y evaluación de potenciales escenarios de riesgo que les permitan anticiparse y propiciar protocolos de actuación para factores que puedan alterar el orden público y afectar el desarrollo oportuno de los proyectos y los servicios resultantes.

##### **Estrategias específicas**

- Identificación de potenciales escenarios de riesgo en colaboración de autoridades competentes y comunidad local
- Elaboración y actualización periódica, de mapas de riesgo de acuerdo a los diagnósticos iniciales de las dinámicas territoriales y sociales
- Diseño de planes de contingencia, planes de acción y protocolo de actuación diferenciados por cada escenario de riesgo
- Implementación de un sistema de evaluación de riesgos
- Consulta permanente de alertas tempranas emitidas por las autoridades competentes para actualización de escenarios y planes

#### **7.4.2.5 Comunicación asertiva y accesible**

Una de las mayores falencias en la ejecución de este tipo de proyectos es la falta de información clara, oportuna y accesible para toda la población. En estos procesos, es importante que las empresas adopten una comunicación clara y accesible de sus procesos para que la información sea comprensible para los diferentes grupos poblacionales. Así mismo, la generación de espacios de socialización, concertación y atención son relevantes para fomentar la credibilidad en sus proyectos.

### Estrategias específicas

- Diseño de canales o estrategias permanentes de comunicación efectiva con la comunidad desde medios de difusión masiva de información como las emisoras comunitarias o municipales, reuniones comunales, redes sociales, etc.
- Disponer de canales físicos de información para la atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos.
- Las estrategias comunicativas de información elaboradas o ajustadas deben ser accesibles, utilizando un lenguaje poco técnico y adaptadas a las necesidades de la población.

Finalmente, como recomendación para gestionar debidamente los impactos del orden público se propone que cada una de las estrategias señaladas se adapten a los entornos específicos donde convergen proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia, de acuerdo a lo siguientes aspectos:

- **Análisis contextual:** Realizar estudios previos del entorno, identificando actores clave, dinámicas sociales y factores de riesgo asociados.
- **Desarrollo de estrategias de mitigación:** Diseñar y adaptar intervenciones y planes de contingencia específicos para cada municipio.
- **Implementación de estrategias:** siempre se debe involucrar a la comunidad y a otros actores relevantes en la implementación.
- **Monitoreo y evaluación:** Definir indicadores para medir la efectividad de las estrategias implementadas y realizar evaluaciones periódicas para realizar ajustes.

- **Divulgación y sensibilización:** Elaborar informes sobre el progreso y los resultados obtenidos. Además, realizar campañas para educar a la comunidad sobre la importancia de la seguridad en proyectos energéticos.
- **Retroalimentación y mejora continua:** Recopilar aportes de las partes interesadas para mejorar continuamente en función de la retroalimentación y los resultados.
- **Enfoque para minimizar impactos del orden público:** Garantizar un enfoque participativo que involucre activamente a las comunidades locales en la planificación y ejecución de los proyectos, generando relaciones de confianza con los líderes y organizaciones.
- **Colaboración interinstitucional:** Establecer alianzas con organismos gubernamentales, ONG y otras instituciones para coordinar esfuerzos en la mitigación de riesgos.
- **Gestión de riesgos:** Implementar un sistema de evaluación de riesgos que contemple factores de orden público y su impacto en la infraestructura energética.

## 8 Conclusiones

Esta monografía tuvo como propósito general desarrollar una serie de estrategias orientadas a la minimización de los impactos generados por factores de orden público en proyectos de infraestructura energética en el Norte de Antioquia. A partir de un estudio de caso representativo, se identificaron los principales efectos ocasionados, los actores clave involucrados, las causas estructurales de dichos impactos y patrones comunes presentes en la región. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo fundamentado en las entrevistas semiestructuradas, revisión documental y un análisis del contexto territorial.

En este sentido, los hallazgos permitieron confirmar que el orden público juega un papel determinante en el desarrollo de las regiones, pues está directamente relacionado con estabilidad, la seguridad, la garantía de derechos y la convivencia ciudadana. Sin embargo, en contextos donde no se garantizan las condiciones mínimas para mantener o equilibrar ese orden público, suelen surgir conflictos sociales que, sumados a las dinámicas territoriales históricas como la presencia de grupos armados ilegales, la exclusión social y la limitada presencia institucional dificultan y generan desafíos para la ejecución y sostenibilidad de los proyectos.

Específicamente, la investigación evidenció que la inestabilidad en el orden público ha generado retrasos, sobrecostos, y alteraciones tanto técnicas como logísticas a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Adicionalmente, las tensiones con las comunidades locales, la frágil articulación interinstitucional y la inseguridad causada por el accionar de grupos armados ilegales agravaron dichos efectos, como bien lo expresó un líder social: *“Es crucial entender que la mejora del orden público es una condición fundamental para que los proyectos de desarrollo, incluyendo los de energía puedan tener un impacto positivo en la comunidad local. Sin seguridad y sin un estado sólido los esfuerzos para impulsar el progreso social y económico se ven gravemente perjudicados. Además, es importante que nuestras voces, las voces de la comunidad sean escuchadas y tenidas en cuenta en todo el proceso de planificación y desarrollo de estos proyectos, porque el conocimiento que tenemos del territorio y la dinámica social local es clave para identificar riesgos, impactos negativos y asegurar que los beneficios lleguen realmente a las personas que más lo necesitan”* (líder social, zona rural, 2025).

Estos resultados coinciden con la literatura existente sobre conflictividad social y orden público en proyectos de infraestructura, que señala que los conflictos no surgen exclusivamente por impactos materiales, sino también por dinámicas de exclusión, disputas por el control territorial y la falta de reconocimiento a las comunidades, especialmente las de zona rural y dispersas de la región. Además, la débil implementación de mecanismos de socialización, consulta y participación efectiva en algunos

lugares remotos del territorio, deterioran la relación entre empresas, instituciones locales y comunidades.

Por lo tanto, los problemas de orden público no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de una compleja interacción entre factores históricos, sociales, políticos y económicos de una región.

Finalmente, a pesar de estos desafíos y los múltiples riesgos relacionados con el orden público, los proyectos de infraestructura energética en la subregión del Norte Antioqueño representan una oportunidad importante para impulsar el desarrollo económico y social de los territorios locales, al mejorar el acceso a servicios básicos, la conectividad en el país, la generación de empleo y calidad de vida. Así lo manifestó un funcionario local *“a pesar de muchas situaciones con el orden público y otras problemáticas que se evidencian a causa de estos proyectos, también han servido para la generación de empleo, educación, crecimiento poblacional, adecuación de vías y para mejorar la calidad de vida”* (funcionario local, zona urbana, 2025). No obstante, su consecución dependerá de la capacidad de implementación de estrategias que reconozcan el contexto local, fortalezcan la articulación institucional y promuevan espacios de participación activa de las comunidades desde todas las etapas y ciclos de vida de nuevos proyectos.

## Referencias

Ministerio de Minas y Energía (2021). Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minenergia.gov.co/documents/5856/TRANSICION\_ENERGETICA\_COLOMBIA\_BID-MINENERGIA-2403.pdf

Gobernación de Antioquia (2025). Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Firme” 2024-2027. Recuperado de <https://antioquia.gov.co/plan-desarrollo-2024-2027>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2024). Proyecciones demográficas, con base en el censo de 2018 ajustes postCovid. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica/cnpv-presentaciones-en-territorio#Cronologico>

Gobernación de Antioquia (2022). Informe de gestión (2022): Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida” 2020-2023. Recuperado de <https://antioquia.gov.co/>

Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, Universidad de Antioquia & Gobernación de Antioquia (2020). Subregión Norte de Antioquia, perfil de desarrollo subregional. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2020/11/perfil-subregional-norte.pdf

Olivares Tobón, S. (2023). Grupos armados destruyen torre del sistema de energía en Antioquia, El Colombiano. Recuperado de <https://www.elcolombiano.com/antioquia/derriban-en-atentado-una-torre-de-energia-en-antioquia-EH22432420>

Gutiérrez López, J. A. (2022). La protesta social en Colombia: una visión desde el comportamiento de las multitudes. En W. A. Sierra Gutiérrez & V. Torrijos (Eds.), Movilización social violenta (pp. 39-58). Sello Editorial ESDEG. <https://doi.org/10.25062/9786287602328.02>

Informe Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia. Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social (2024). Recuperado de <https://minsus.net/la-conflictividad-social-en-el-sector-minero-energetico-colombiano-un-analisis-integral-para-promover-un-desarrollo-sostenible/>

Mozas Moral, A., Fernández Uclés, D., Bernal Jurado, E., & Medina Viruel, MJ (2020). Sostenibilidad, Desarrollo endógeno y economía social. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socio-ecológica*. <https://doi.org/10.33776/riesise.v3i0.4980>

Duque Grisales, E. A., & Arango Vásquez, L. (). Alternativa de las pequeñas centrales hidroeléctricas de Antioquia en el mecanismo de desarrollo limpio. *Revista Ciencias Estratégicas*, 24(35), 73-100.

Isabel Cristina Zuleta (2021). «Hidroituango: Un desastre socioambiental con responsabilidad internacional». <https://doi.org/10.4000/ideas.10005>

Piza G., J., & Lara H., M. (2020). Responsabilidad extracontractual del Estado por los posibles daños generados a la población a causa del proyecto Hidroituango (Trabajo de grado). Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Derecho, Bello.

Defensoría del Pueblo (2020). Alerta Temprana No. 004-2020: Municipios de Briceño e Ituango (Antioquia). [https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?orden=mun\\_afectados\\_desc&criterioBusqueda=Antioquia&anioBusqueda=](https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?orden=mun_afectados_desc&criterioBusqueda=Antioquia&anioBusqueda=)

Ika, L., Rego, M. L., Holzmann, V., & Gil, N. (2023). Special issue: Infrastructure delivery and project management in low-and middle-income economies. *Cadernos EBAPE.BR*, 21(5), 1-9. doi: <https://doi.org/10.1590/1679-95120230162x>

Henok, A. H., & Tshehla, M. (2024). Risk factors of public-private partnerships for public infrastructure projects in developing countries. *African Journal of Public Administration and Environmental Studies*. <https://doi.org/10.31920/2753-3182/2024/v3n3a7>

Aubin, N. k., Marceleau, B. B. (2024). International Law and Contemporary Security Challenges: A Focus on the Emergence of the Concept of Energy Security. University and Houston and Université Marien N'gouabi. <https://dialnet.ezproxy.uniminuto.edu/servlet/articulo?codigo=9970149>

Sorzano, D., Villamizar, J., Galván-Vela, E. y Ravina-Ripoll, R. (2024). Environment and Armed Conflict: Perspectives of Former Combatants of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) Jurídicas CUC, 20 (1), 269-285. DOI <https://doi.org/10.17981/juridcuc.20.1.2024.12>

Cardona Quintero, F. A., & Lasso Silva, E. R. (2025). Bussiness dynamism in contexts of armed conflict in Colombia: a multidimensional approach. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1761>

Castro-Cárdenas, C., & Ibarra-Yunez, A. (2023). Understanding the link between energy poverty and economic growth in Latin America. *Contaduría y Administración*, 68(2), 175–198. <https://doi-org.ezproxy.uniminuto.edu/10.22201/fca.24488410e.2023.4629>

Karpavicius, T., Balezentis, T., Streimikiene., D. (2024). Energy Security indicators for sustainable energy development: Application to electricity sector in the context of state economic decisions. Sustainable Development. <https://www-scopus-com.ezproxy.uniminuto.edu/results/results.uri?st1=%28%22orden+p%C3%BAblico%22%29&st2=&s=TITLE-ABS-KEY%28%28+%22energy%22+OR+%22war%22+%29%29&limit=10&origin=searchbasic&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sessionSearchId=a0b40374d3f0415268bf75ad6873b8cc&cluster=scolang%2C%22English%22%2Ct%2Bscosubjabbr%2C%22SOCl%22%2Ct%2Bscosubjabbr%2C%22Public+Policy%22%2Ct%2C%22Public+Order%22%2Ct>

Erazo Patiño, L. A., & Coronado Camero, E (2022). The relationship between conflict and development in Colombia predicated on a public policy precedent. *Revista Científica General José María Córdova*, 20(39), 489-503. <https://dx.doi.org/10.21830/19006586.890>

Yépez-García, A., Levy, A., & Valencia J., AM (S.F.). The Energy Sector: Opportunities and challenges. <https://doi.org/10.18235/0010658>

Muñoz Gaviria, G. A. (2019). El estudio de impacto ambiental como elemento de construcción de realidad. El caso de la central hidroeléctrica Porce III. *Territorios*, (41), 223–243.

<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.6535>

Gestor normativo (s.f.). Marco legal aplicable a la investigación. Función pública.

Recuperado el 2025, de <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo>

Vqingeniería (s.f.) ¿Por qué son importante los proyectos de infraestructura para el desarrollo de un país?, vqingenieria.com (s.f.). <https://www.vqingenieria.com/por-que-son-importantes-los-proyectos-de-infraestructura-para-el-desarrollo-de-un-pais#:~:text=La%20infraestructura%20se%20conoce%20como,hospitalaria%2C%20educaci%C3%B3n%2C%20entre%20otros>

<https://www.vqingenieria.com/por-que-son-importantes-los-proyectos-de-infraestructura-para-el-desarrollo-de-un-pais#:~:text=La%20infraestructura%20se%20conoce%20como,hospitalaria%2C%20educaci%C3%B3n%2C%20entre%20otros>

Ministerio de Mina y Energía (s.f.). Funcionamiento del sector y Gestión del riesgo de desastres – GRD. Recuperado de <https://www.minenergia.gov.co/es/misional/gesti%C3%B3n-social-y-ambiental/gesti%C3%B3n-del-riesgo-de-desastres-grd/>

## Anexos

### Anexo 1. Entrevista semiestructurada

**Institución:** UNIMINUTO

**Investigadores:** Gladys Elena Gómez Chavarría; Joan Sebastián Rendón Echavarría

**Propósito:** Recoger información y perspectivas de líderes y comunidad sobre cómo los temas de orden público afectan los proyectos de infraestructura de redes de energía en el Norte de Antioquia.

**Link:** <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAHx-lmdt85lBgbHhw53WM59UNIE3QORPVVM4RThMV0NUWdc2SE84SVNPNi4u>

#### Sección 1: Contexto General

- 1.1. ¿Cuál es su visión sobre el estado actual del orden público en su comunidad?
- 1.2. ¿Cómo perciben la relación entre el orden público y el desarrollo de proyectos de infraestructura?

#### Sección 2: Impacto en Proyectos de Infraestructura

- 2.1. ¿Ha habido proyectos de infraestructura de redes de energía en su comunidad? Si es así, ¿cuáles?
- 2.2. ¿Qué retos han enfrentado estos proyectos debido a problemas de orden público?
- 2.3. ¿Cómo han afectado estos problemas a la comunidad en términos de acceso a la energía?

#### Sección 3: Perspectivas y Soluciones

- 3.1. ¿Qué medidas consideran necesarias para mejorar el orden público en relación con estos proyectos?
- 3.2. ¿Qué papel deberían jugar las autoridades locales y nacionales en la mitigación de estos problemas?
- 3.3. ¿Qué recomendaciones darían a las empresas encargadas de la implementación de proyectos de infraestructura energética?

#### Sección 4: Cierre

- 4.1. ¿Qué impactos ha observado, desde su experiencia, en la comunidad local respecto a la implementación de proyectos de infraestructura energética?
- 4.2. ¿Hay algo más que deseen agregar sobre este tema?

## Consideraciones Finales

**5.1. Confidencialidad:** Asegurar a los líderes y comunidad que sus respuestas serán tratadas con confidencialidad.

**5.2. Flexibilidad:** Adaptar las preguntas según la dinámica de la conversación y la experiencia del líder comunitario.

**5.3. Cierre:** se agradecerá por el tiempo y disposición brindada.

Esta estructura permitió obtener información valiosa y perspectivas que ayudaron a entender mejor la situación objeto de estudio y buscar soluciones efectivas.

## Anexo 2. Alerta temprana

### Titulo

Alerta temprana No. 004 de 2020 para población en riesgo de los municipios de Briceño e Ituango (Antioquia)

### Fecha de publicación

24 de enero de 2020

### Fuente

Defensoría del Pueblo (2020). Alerta temprana 004 de 2020; Sistema de alertas tempranas (SAT).

Disponible en

[https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?page=2&orden=mun\\_afectados\\_desc&currentFilter=Antioquia](https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?page=2&orden=mun_afectados_desc&currentFilter=Antioquia)

### Resumen del contenido

La alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo advierte de los inminentes riesgos derivados de la expansión y accionar de los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC -EP, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas en los municipios de Briceño e Ituango, al norte de Antioquia. Esta alerta, evidencia cómo estos actores, en disputa por el

control territorial han intensificado su presencia en zonas rurales y corredores estratégicos generando diversas afectaciones en el territorio, entre ellas graves violaciones a las comunidades.

## Ficha estructural

<b>004-20</b>		Emisión
Estructural		24/01/2020
<b>Economías ilegales</b>		
Narcotráfico Minería ilegal		
<b>Grupos Armados Ilegales</b>		
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Facciones disidentes de las FARC-EP Bloque Virgilio Peralta Arenas		
<b>Lugar de advertencia</b>		
Briceño, Ituango (Antioquia)		
<b>Advertencias previas</b>		
018-20, 022-18, 026-18, 029-18, 035-19		
<b>Tema Clave</b>		
El escenario de riesgo se configura a partir de la expansión y accionar de las AGC, la presencia de otras estructuras ilegales presuntamente asociadas con el Bloque Virgilio Peralta Arenas y la expansión y accionar del Frente 18 Román Ruiz.		
<b>Población afectada</b>		
28230 Personas Adolescentes; Autoridades étnicas de gobierno; Comerciantes; Indígenas; Miembros PNIS ; Miembros de Juntas de Acción Comunal; Mujeres; Niños y niñas; Personas en proceso de reincorporación; Reincorporados; Transportadores; Otro; Personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y líderes sociales		
<b>Conductas vulneratorias e infracciones al D.J.H</b>		<b>Advertida</b>
		<b>Identificada</b>
Recrutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes	X	X
Contaminación por MAP - MUSE - AB	X	X
Desaparición forzada	X	X
Desplazamiento forzado	X	X
Extorsión	X	X
Homicidio	X	X
Masacre	X	X
Violencia basada en genero	X	X
Violencia sexual	X	X
Amenazas	X	X
Enfrentamientos con interposición de la población civil	X	X
<b>Mapa</b>		
<b>Información adicional de ubicación</b>		
<b>Veredas:</b> EL CEDRAL; BUENA VISTA; ALTO EL CHIRI; BERLIN; LA MINA; OREJON; EL PESCADO; LA AMERICA; LOS NARANJOS; CUCURUCHO; LA CALERA; EL RESPALDO; TRAVESIAS; EL ROBLAL; PALMICHAL; EL GUAICO; EL POLVILLO; GURIMAN; PALESTINA; TURCO; LA HONDA; LA FLORIDA; EL TINTO; PEÑA; GUACHARAQUERO; LA HUNDIDA; CORTADERAL; BUENAVISTA; EL NARANJO; PALO BLANCO; EL CEDRAL; SINGO; BAJO INGLES; LAS CUATRO; GEORGIA; PASCUITA; LA MIRANDA; TORRENTE; SANTA ANA; FILADELFIA; QUEBRADA DEL MEDIO; EL GUADUAL; CANDELARIA BAJA; EL CHIRIMBOLO; CANDELARIA ALTA; CHONTADURO; MANDARINO; EL QUINDIO; LA CRISTALINA; TRAVESIAS; SANTA LUCIA; EL RECREO; LA PRENSA; LA AMERICA; PARQUE NACIONAL NATURAL DEL PARAMILLO; QUEBRADONA; ALTO DE SAN AGUSTIN; SAN AGUSTIN DE LEONES; EL CASTILLO; CONGUITAL <b>Resguardos Indígenas:</b> JAI-DUKAMA		

### Anexo 3. Registro fotográfico

#### Grupo objeto de estudio

Funcionarios públicos

Comunidad local y empleados locales

Líderes sociales

#### Fecha

Abril de 2025

#### Matriz

Registro fotográfico de las entrevistas semiestructuradas realizadas a diferentes participantes		
<b>Propósito:</b> Presentación del registro fotográfico correspondiente a las entrevistas cualitativas, realizadas con el fin de ilustrar el contexto de los encuentros realizados en el territorio en el marco del proyecto		
Tema central	Registro	
Analizar las principales dificultades que se han presentado con las comunidades locales durante la construcción de proyectos de infraestructura energética		
		

Fuente: Elaboración del equipo

## Anexo 4. Gráfico resumen de entrevistas

### Propósito

Sintetizar los hallazgos relevantes o los patrones comunes identificados en las entrevistas cualitativas implementadas

